**ACTA Nº 28-2021**

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL. -** San José, a las ocho horas treinta minutos del **cinco** de **julio** de dos mil veintiuno.

Sesión ordinaria con asistencia del máster Carlos Montero Zúñiga, de la licenciada Ingrid Moya Aguilar y del licenciado Arnoldo Hernández Solano. Asiste a la presente sesión el integrante suplente doctor Juan Carlos Segura Solís, el integrante suplente licenciado Freddy Chacón Arrieta y el integrante suplente Alexander Arguedas Vindas, en sustitución de la integrante licenciada Ana Lucrecia Ruiz Rojas, que se encuentra de vacaciones.

Asimismo, asiste en calidad de invitado el MPM. Oslean Mora Valdez, como colaborador de la Junta en temas administrativos de conformidad con el permiso con goce de salario otorgado por el Consejo Superior en sesión N° 53-2021 del 29 de junio de 2021, artículo LXI, asimismo, por lo acordado en sesión N° 17-2021, celebrada el 19 de abril de 2021, artículo XXV, en donde se designó al MPM. Mora Valdez, como Director a.i. de esta Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

**ARTÍCULO I**

**Documento N° 890-2021**

Se entra en el pleno de la sesión y por unanimidad, se aprueba el orden del día de la presente agenda elaborada por la Secretaría General de la Corte. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO II**

**Documento N° 890-2021**

Se aprueba el acta N° 27-2021 de la sesión celebrada el lunes 28 de junio de 2021. La Integrante Moya Aguilar se abstiene de aprobar el acta, en razón de no haber participado. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO III

**Documento N° 862-2021**

Mediante resolución N° 85-2021 de las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Secretaría General de la Corte notificó el 23 de junio a la señora Yorleny Serrano Quintero, que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión N° 25-2021 celebrada el 14 de junio de 2021, artículo IX, tomó el acuerdo que literalmente dice:

“La Secretaría General de la Corte mediante resolución N° 58-2021 de las diez horas cuarenta y seis minutos del doce de mayo del dos mil veintiuno, notificó a las señoras Yorleny Serrano Quintero, Silvia Elena Calvo Serrano y el señor Rafael Arguello Rodríguez, que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en sesión N° 19-2021 celebrada el 10 de mayo del 2021, artículo VI, dispuso lo siguiente:

**“**En sesión N° 12-2021 celebrada el 15 de marzo de 2021, artículo VII, se tomó el acuerdo que dice:

“En sesión 7-21 celebrada el 15 de febrero de 2021, artículo XXV, se tomó nota del oficio N° 121-TE-2021 del 3 de febrero de 2021, suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría, Jefe de Macroproceso Financiero Contable, la máster Floribel Campos Solano, Jefa de Proceso de Tesorería y la máster Andrea Valerín Arroyo, Jefa de Subproceso de Egresos, relacionado con el resultado del cruce de bases de datos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial con la Caja Costarricense del Seguro Social, correspondiente al III trimestre del 2020. Y en cuanto al punto 2. A. se solicitó al Macroproceso Financiero Contable para que en coordinación con la Dirección Jurídica se establecieran los procedimientos para el cobro de las sumas en que la persona recibió salario y a su vez jubilación, mediante el debido proceso que se encuentra establecido y conforme al criterio jurídico de la Máster Karol Monge Molina, asesora externa, referente a los casos de personas jubiladas por incapacidad que se encuentren laborando.

El máster Miguel Ovares Chavarría y las máster Floribel Campos Solano y Andrea Valerín Arroyo; por su orden, Jefe interino de Macroproceso Financiero Contable, Jefa interina de Proceso de Tesorería y Jefa interina Subproceso de Egresos, mediante oficio N° 277-TE-2021 del 05 de marzo de 2021, comunicaron lo siguiente:

“En atención al contenido del oficio N° 191-2021 de la Junta Administradora FJPPJ, correspondiente al acuerdo tomado en sesión N° 7-2021 celebrada el 15 de febrero de 2021, artículo XXV, en el cual se acordó para lo que interesa:

*“[…]* ***2.)*** *En cuanto al punto 2. A. solicitar al Macroproceso Financiero Contable para que en coordinación con la Dirección Jurídica se establezcan los procedimientos para el cobro de las sumas en que la persona recibió salario y a su vez jubilación, mediante el debido proceso que se encuentra establecido y conforme al criterio jurídico de la Máster Karol Monge Molina, asesora externa, referente a los casos de personas jubiladas por incapacidad que se encuentren laborando.( el subrayado no corresponde al original)”*

Al respecto es preciso indicar que, el procedimiento actual que aplica este Macroproceso para el cobro de sumas pagadas de más es el siguiente:

1. Realiza el cálculo de las sumas pagadas de más, en el momento que se define la suspensión de un beneficio por parte de esa Junta Administradora y se establece el periodo para dicha suspensión.
2. Efectúa la notificación a la persona jubilada por medio de oficio de este Macroproceso, brindando un plazo para la posibilidad de un arreglo de pago, siendo que cuando se recibe la respuesta se eleva a esa Junta Administradora para la autorización respectiva.
3. En caso de que no se llegue a un acuerdo se traslada a la Dirección Jurídica para el procedimiento legal correspondiente.
4. Cuando se llega a un acuerdo de pago con la persona jubilada y se determina la forma de recuperación de la cuenta por cobrar (previa aprobación de esa Junta), este Macroproceso da seguimiento a los pagos ya sea por depósito en la cuenta bancaria del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial o por medio de deducciones a la jubilación.

De conformidad con lo anterior, para aplicar el procedimiento de cobro a las personas que recibieron salario y a su vez jubilación, se requiere dicha Junta determine si se debe suspender a las personas jubiladas separadas por incapacidad absoluta y permanente que, se acogieron al beneficio según Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 de 1994 y que aparecen reportadas en los cruces de bases de datos con la C.C.S.S. en el campo Tipo de Empresa como trabajadores independientes, seguro voluntario o empresa privada.

Aunado a lo expuesto, es necesario que se indique a partir de qué período aplicaría la suspensión y/o cobro de sumas, ya que de considerarse para tales efectos la fecha de rige de la Ley N° 9544, correspondería efectuar lo anterior a partir del 22 de mayo de 2018.

Cabe indicar que, para determinar la suspensión de las personas jubiladas por incapacidad absoluta y permanente, es necesario considerar lo señalado en el informe de doña Karol Monge, que dentro de las conclusiones y recomendaciones señala:

*“5.5. A ese derecho le es enteramente aplicable el régimen de los actos administrativos, de manera de que este tipo de beneficios, a la luz de dicha doctrina, es un acto declaratorio de derechos subjetivos que sólo puede ser revisado, revocado o anulado, por los medios previstos por el ordenamiento, por lo que la Junta debe tener una habilitación legal para actuar de tal forma.*

*5.6. La Junta sí cuenta con una norma de tipo legal -artículo 233 de la LOPJ- que le permite decretar la suspensión del beneficio jubilatorio de aquellas personas beneficiarias de una jubilación por enfermedad.*

*5.7. Tal potestad la puede utilizar siempre y cuando esta sea precedida de un debido proceso.*

*5.8. Debe llevarse a cabo una investigación preliminar por parte de la oficina que la Junta designe para tales labores de fiscalización y de determinarse que la persona jubilada por incapacidad se encuentra laborando de forma remunerada, sin haber solicitado previamente el respectivo permiso ante la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez o la instancia que la CCSS designe; o que habiéndolo solicitado, este le haya sido rechazado, la Junta deberá de forma inmediata proceder a la apertura del procedimiento administrativo correspondiente (el subrayado no corresponde al original).*

De conformidad con el criterio emitido por la Máster Karol Monge Molina y según el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solamente los miembros de ese Órgano Superior pueden decidir sobre la suspensión del beneficio o cobro de sumas, por lo que este Macroproceso estaría a la espera de lo que a bien estime resolver esa Junta Administradora para activar el procedimiento de cobro.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1).** Tener por conocido el oficio N° 277-TE-2021 del 05 de marzo de 2021, suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría y las másteres Floribel Campos Solano y Andrea Valerín Arroyo; por su orden, Jefe interino de Macroproceso Financiero Contable, Jefa interina de Proceso de Tesorería y Jefa interina del Subproceso de Egresos, mediante el que comunican el procedimiento actual que aplica este Macroproceso para el cobro de sumas pagadas de más. **2).** Solicitar al Macroproceso Financiero Contable que continúe con los procedimientos y que remita un informe considerando las particularidades de cada caso en forma individual. Lo anterior tomando en cuenta los casos dados a partir del 28 de enero 2020, que entró en funcionamiento esta Junta Administradora a fin de que se tenga todos los elementos para los efectos correspondientes.””

- 0 -

En relación con lo anterior, el máster Miguel Ovares Chavarría y las másteres Floribel Campos Solano y Xinia Campos Solís; por su orden, Jefe interino de Macroproceso Financiero Contable, Jefa interina de Proceso de Tesorería y Jefa interina del Subproceso de Egresos, en oficio N° 411-TE-2021 de 15 de abril de 2021, informaron:

“En atención al contenido del oficio N° 309-2021 de la Junta Administradora FJPPJ, correspondiente al acuerdo tomado en sesión N° 12-2021 celebrada el 15 de marzo de 2021, artículo VII, en el cual se acordó para lo que interesa:

*“[…]* ***2).*** *Solicitar al Macroproceso Financiero Contable que continúe con los procedimientos y que remita un informe considerando las particularidades de cada caso en forma individual. Lo anterior tomando en cuenta los casos dados a partir del 28 de enero 2020, que entró en funcionamiento esta Junta Administradora a fin de que se tenga todos los elementos para los efectos correspondientes.”*

En virtud de lo dispuesto por ese Órgano Superior, se remite en archivo de Excel adjunto la información con la que a la fecha cuenta esta oficina, pertinente a cada uno de los casos de personas jubiladas separadas por incapacidad absoluta y permanente que, se acogieron al beneficio según Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 de 1994 y que aparecen reportadas en los cruces de bases de datos con la C.C.S.S. entre enero 2020 y diciembre 2020 (los casos marcados en color amarillo son los que cuentan con algún acuerdo del Consejo Superior).

Se informa lo anterior, para lo que a bien estime resolver esa Junta Administradora.

(documento)”

**-0-**

**Por unanimidad se acordó: 1)** Tener por rendido el informe suscrito por el máster Miguel Ovares Chavarría y las másteres Floribel Campos Solano y Xinia Campos Solís; por su orden, Jefe interino de Macroproceso Financiero Contable, Jefa interina de Proceso de Tesorería y Jefa interina del Subproceso de Egresos, en oficio N° 411-TE-2021 de 15 de abril de 2021, referente a la información de las personas jubiladas separadas por incapacidad absoluta y permanente que, se acogieron al beneficio según Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 de 1994 y que aparecen reportadas en los cruces de bases de datos con la C.C.S.S. entre enero 2020 y diciembre 2020. **2)** Comunicar a los señores Yorleny Serrano Quintero (periodo de enero a julio 2020), Rafael Arguello Rodríguez (periodo de enero a junio 2020) y Silvia Elena Calvo Serrano (periodo de octubre y noviembre de 2020), que de acuerdo con el informe del cruce de bases de datos entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, aparecen reportados como trabajadora independiente, seguro voluntario y empresa privada respectivamente y su jubilación fue otorgada por incapacidad absoluta y permanente por lo cual de conformidad con el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (9544), se encuentran incumpliendo lo ahí señalado por lo que se solicita que en el plazo de 10 días hábiles se pronuncien o caso contrario se procederá con la suspensión del beneficio de jubilación**. 3)** Comisionar a la Dirección de la Junta Administradora para que se realicen las diligencias correspondientes para cada uno de los casos señalados en el punto 2. **Se declara acuerdo firme**”

- 0 -

Los másteres Oslean Mora Valdez y José Andrés Lizano Vargas, por su orden, Director interino y Jefe del Proceso de Operaciones, de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en oficio N° *48-PO-2021 de 28 de mayo de 2021, remitieron lo siguiente:*

**“**En relación con el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión N° 19-2021 celebrada el 10 de mayo de 2021, artículo VI, que para lo que interesa señala:

***“[…] 2)*** *Comunicar a los señores Yorleny Serrano Quintero (periodo de enero a julio 2020), Rafael Arguello Rodríguez (periodo de enero a junio 2020) y Silvia Elena Calvo Serrano (periodo de octubre y noviembre de 2020), que de acuerdo con el informe del cruce de bases de datos entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, aparecen reportados como trabajadora independiente, seguro voluntario y empresa privada respectivamente y su jubilación fue otorgada por incapacidad absoluta y permanente por lo cual de conformidad con el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (9544), se encuentran incumpliendo lo ahí señalado por lo que se solicita que en el plazo de 10 días hábiles se pronuncien o caso contrario se procederá con la suspensión del beneficio de jubilación. […]”*

En forma atenta se indica:

* Que la Secretaría General de la Corte notificó la resolución N° 58-2021 a la jubilada judicial vía correo electrónico el 13 de mayo de 2021.
* Que en respuesta a dicha notificación la señora Yorleny Serrano Quintero, presentó en la plataforma de servicios de esta oficina el 18 de mayo de 2021 la documentación pertinente (véase documento adjunto).
* Que la jubilada judicial en dicho documento cita como **petitoria** lo siguiente:

*“[…] Dejo así externada mi situación y solicito de conformidad al debido proceso sea archivado mi proceso así mismo solicito que se me indique si debo SUSPENDER EL SEGURO DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE a pesar que fue requisito para poder colaborarle a la dueña de la Soda para los permisos de funcionamiento. Y si fuese así solicito que se me indique un tiempo prudencial ya que tengo entendido que en el mes de octubre debe renovarse dicho permiso y así que pueda la suscrita traspasar toda la documentación n a la persona que sea asignada por la dueña del mismo.”*

Se informa lo anterior, para lo que corresponda a esa Junta Administradora**”**

(documento)

- 0 -

**Se acordó por unanimidad:** **1.)** Tener por recibido el oficio N° 48-PO-2021 de 28 de mayo de 2021, suscrito por los másteres Oslean Mora Valdez y José Andrés Lizano Vargas, por su orden, Director interino y Jefe del Proceso de Operaciones, de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en el cual hacen de conocimiento de la nota presentada por la señora Yorleny Serrano Quintero sobre la situación por la cual aparece reportada en las planillas de la CCSS como trabajadora independiente. **2.)** Considera esta Junta Administradora que de los elementos aportados por la señora Serrano Quintero, no es demostrable de que no tenga participación en el negocio, por lo que deberá la Dirección de la Junta Administradora proceder a realizar el estudio de las sumas giradas en demasía y comunicarlo a la señora Serrano Quintero para realizar el debido proceso.**”**

- 0 -

La señora Yorleny Serrano Quintero, mediante correo electrónico de 26 de junio de 2021, presentó recurso de revocatoria o reconsideración contra lo dispuesto en sesión N° 25-2021 celebrada el 14 de junio de 2021, artículo IX, en la que en lo conducente aporta nueva prueba de Contrato de Arrendamiento de Establecimiento Comercial, solicitando así se archive el mismo, en el tanto contesta sobre la razón por la que aparece reportada como trabajadora independiente.

Seguidamente, se adjunta para su análisis el citado recurso.



- 0 -

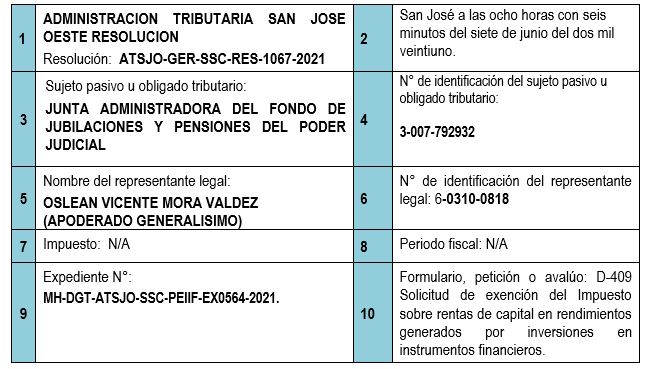
**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por recibida la gestión de la señora Yorleny Serrano Quintero, mediante correo electrónico de 26 de junio de 2021, mediante la que presenta recurso de revocatoria o reconsideración contra lo dispuesto en sesión N° 25-2021 celebrada el 14 de junio de 2021, artículo IX, en la que en lo conducente aporta nueva prueba de Contrato de Arrendamiento de Establecimiento Comercial. **2.)** Se rechaza la reconsideración interpuesta por la señora Serrano Quintero y mantener lo resuelto en sesión N° 25-2021 celebrada el 14 de junio de 2021, artículo IX de esta Junta Administradora, dado que el nuevo elemento que aporta corresponde a un contrato del año 2012, lo cual no varía en nada las condiciones que se presentaron en planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, en ese sentido, se tiene por agotada la vía administrativa. **3.)** Comunicar a la jubilada judicial que cuando fue comunicada de los hechos presentados, tuvo la oportunidad procesal para presentar la prueba que estimara pertinente y en esta etapa ya ese momento precluyó, por lo que en cuanto a la solicitud de la jubilada de que esta Junta le indique cual es la prueba oportuna para demostrar su condición, no es competencia de esta Junta Administradora el asesorar a las personas respecto a los elementos que debe aportar para demostrar su condición.

## ARTÍCULO IV

**Documento N° 860-2021**

El señor Gerardo Chévez Ramírez, Gerente de la Administración Tributaria de San José Oeste del Ministerio de Hacienda, mediante acta de notificación por correo electrónico de 25 de junio de 2021, remitió lo siguiente:

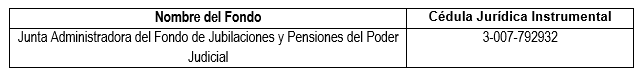
**“ACTO ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCION DE EXONERACIONES DEL IMPUESTO DE RENTAS DE CAPITAL MOBIIARIO A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

****

Conoce esta Administración Tributaria solicitud de exoneración indefinida del impuesto sobre rentas de capital a los rendimientos generados por inversiones en instrumentos financieros, interpuesta por el Señor Oslean Vicente Mora Valdez, cédula de identidad número no (valor), en su condición de Apoderado Generalísimo de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. (Folios 1 y 2).

**RESULTANDO**

1. El día 11 de mayo del 2021, el señor Oslean Vicente Mora Valdez, cédula de identidad número (valor), en su condición de Apoderado Generalísimo de la junta Administradora del Fondo de jubilaciones y Pensiones del poder judicial, con cédula jurídica N° 3-007-792932 quien administra los siguientes fondos:



Presentó solicitud formal para la exoneración indefinida de los rendimientos generados por los fondos previamente detallados.

El interesado adjuntó los siguientes documentos a la solicitud presentada (Folios del 3 al 39): • Escritura de Poder Generalísimo otorgado al Sr. Oslean Vicente Mora Valdez. • Certificación Literal N° 6347754-2020. • Certificación Notarial del 12 de febrero del 2020. • Certificación de Número de Cédula Jurídica / Consecutivo Identificador N° 6062995-2018. • Documento C-021-2021 del 29 de enero de 2021. • Documento “Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial N° 9544”.

2. No se observan vicios de puedan tomar ilegal el presente asunto.

CONSIDERANDO

I. Mediante artículo 28 bis de la Ley N°7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y resolución DGT-R-10-2020 de las ocho y cinco horas del treinta de abril del dos mil veinte, publicada en la Gaceta N°109 del 13 de mayo del 2020 se dispone la correcta aplicación de las exenciones al pago del impuesto sobre los rendimientos generados por inversiones en instrumentos financieros.

II. En el Decreto Ejecutivo N°34691-J, publicado en La Gaceta N° 159 del 19 de agosto del 2008, se regula lo relativo a la emisión de las cédulas jurídicas. Asimismo, mediante criterio registral N° DGRN/01/2008, de setiembre del 2008, el Director General del Registro Nacional se pronunció en relación con la necesidad de que ciertos entes sin personalidad jurídica contaran con su respectiva identificación numérica a los efectos de que puedan cumplir con los fines que la ley les asignó. A este respecto, el criterio mencionado indicó que: “(…) el Registro Nacional asignará un número identificador para aquellas entidades que sin ser personas jurídicas (condominios, fideicomisos, fondos de inversión, embajadas, ministerios, entre otros), requieran de dicha identificación para la debida consecución de sus objetivos y por su relación con los particulares, cuya vigencia y estructura será similar a la de la cédula jurídica, pero con elementos que las diferenciarán de aquellas.”

III. Que, hechas las verificaciones del caso, se tiene que la Junta Administradora de Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al 02 de junio del 2021, según Consulta de Situación Tributaria, se encuentra al día en el pago de impuestos que administra la Dirección General de Tributación de conformidad con el artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Folio 43). En lo que respecta ante la Caja Costarricense del Seguro Social según consulta de fecha 02/06/2021 se encuentra al día. (Folio 44)

IV. Que visto el Artículo 239 de la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N°9544, en el cual sustenta su petición de solicitud de exoneración de los impuestos sobre intereses generados por inversiones en instrumentos financieros, indica lo siguiente: “Se crea la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial como un órgano del Poder Judicial, que contará con completa independencia funcional, técnica y administrativa, para ejercer las facultades y atribuciones que le otorga la ley. Le corresponde a la Junta: a) Administrar el Fondo de Pensiones y jubilaciones de los Empleados del Poder Judicial (…), // no obstante al respecto le indico que esta Administración notifico el 02 de noviembre del 2020 la Resolución ATSJO-GER-SSC-2283-2020 del 26 de octubre del 2020, en la cual se le concede autorización de exoneración indefinida sobre rentas de capital mobiliario de rendimientos generados por inversiones en instrumentos financieros, de conformidad en el Artículo 28 bis numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder judicial cédula jurídica 3-110759688 con una vigencia a partir del 30 de mayo del 2020.

Ahora bien, con respecto a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial si realiza actividades de las contempladas en el capítulo XI denominado “Rentas de Capital y Ganancias de Capital” de la Ley del impuesto sobre la Renta, las mismas si se encuentran gravadas con este impuesto, a menos que la Ley haya dejado expresamente exentas en el artículo 28 bis de dicha Ley.

Así mismo se tiene que el artículo 28 bis de la Ley 7092 del 21 de abril de 1988, el cual fue adicionado por el título II aparte 14 de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas N° 9635 del 03 de diciembre del 2018, establece las exenciones del capítulo XI de Rentas de Capital y Ganancias y pérdidas de Capital y en este artículo no establece exención alguna para su representada.

Por lo que del análisis en los documentos aportados por el solicitante y de la normativa de cita, se tiene que su situación no se encuentra tipificada como uno de los supuestos de exención del artículo 28 bis de la ley del impuesto sobre la renta.

**Por Tanto**

**LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE SAN JOSE OESTE RESUELVE**

Con base en las consideraciones de hecho y de derecho apuntadas, denegar en todos sus extremos la solicitud de exoneración indefinida en el impuesto sobre las rentas de capital a los rendimientos generados por inversiones en instrumentos financieros, a favor de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cédula jurídica 3-007-792932.

Cuenta el interesado con un plazo de 30 días hábiles para interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 156 del Código. El escrito que lo contenga debe ser dirigido a esta Gerencia y presentarse en las oficinas de la Administración Tributaria de San José Oeste. Asimismo, se le previene que debe indicar un medio para atender futuras notificaciones y, en caso de que no lo haga, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas, después de dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Código y 91 de su Reglamento. Notifíquese”.



- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por conocido el documento remitido por el señor Gerardo Chévez Ramírez, Gerente de la Administración Tributaria de San José Oeste del Ministerio de Hacienda, mediante acta de notificación por correo electrónico de 25 de junio de 2021, con el que se comunica la denegatoria a la solicitud de exoneración indefinida en el impuesto sobre las rentas de capital a los rendimientos generados por inversiones en instrumentos financieros, a favor de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. **2.)** Trasladar a la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, paraque coordine con el abogado Hulbert Volio y Montero, a quien por rol corresponde, para que analice si es procedente presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 156 del Código. **Se declara acuerdo firme.**

## ARTÍCULO V

**Documento N° 849-2021**

En la sesión N° 25-2021 celebrada el 14 de junio de 2021, artículo V, esta Junta Administradora, dispuso lo siguiente:

“En sesión N° 22-2021 celebrada el 24 de mayo de 2021, artículo XX, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

 “En sesión N° 15-2021 del 26 de abril de 2021, artículo XVII, esa Junta Administradora tomó el acuerdo que literalmente dice:

 “En la sesión N° 1-2021 celebrada el 4 de enero del 2021, artículo XIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

 “En sesión N° 38-2020 celebrada el 23 de noviembre de 2020, artículo XIV, esta Junta Administradora tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En sesión N° 36-2020 celebrada el 09 de noviembre del 2020, artículo XXVIII, se tomó el acuerdo que literalmente dice:

“En oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, remitieron el siguiente informe:

 “Para los efectos del conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, esta Dirección en fecha 13 de octubre de 2020, recibió la gestión del señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, mediante la cual solicita se le otorgue la pensión por el fallecimiento de su esposa la funcionaria judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez, por lo que a continuación se procede a detallar:

**I. Información personal y laboral de la señora María Gabriela Calvo Ramírez.**

 · De conformidad con la información sustraída del Registro Civil, al momento de su deceso la servidora Calvo Ramírez contaba con 42 años, 10 meses y 17 días de edad.

 · Estado civil, casada.

 · Condición de nombramiento en el Poder Judicial, propietaria.

 · Tiempo servido, 19 años, 10 meses y 21 días.

**II. Normativa que regula la gestión.**

 Ley N° 9544, Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, artículo 224:

 “Los servidores judiciales **con veinte o más años de servicio en el Poder Judicial** podrán acogerse a una jubilación ordinaria igual a un ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de los últimos veinte años de salarios mensuales ordinarios devengados en su vida laboral, actualizados según el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), **siempre y cuando hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan trabajado al menos treinta y cinco años.”** (Énfasis agregado).

 Artículo 229:

 […] “En caso de **muerte de un servidor activo**, la cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al **monto de pensión que hubiera recibido el fallecido** **de acuerdo con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia**…”. (Énfasis agregado).

**III. Conclusión.**

 Conforme la normativa que regula la solicitud del señor Camacho Alpizar y del análisis de los antecedentes laborales y personales de la señora María Gabriela Calvo Ramírez al momento de su deceso, se verifica que la exservidora no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 224 para aprobar un derecho de jubilación, lo cual por consiguiente; no permite desde el componente legal de la solicitud, acceder a la determinación de un monto de pensión.

 De esta forma, se pone en conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la gestión presentada por el señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, para su atención.

(…).”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad:** En razón de lo indicado en oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, informar al gestionante señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, que no es posible acoger lo que solicita debido a que, en su caso, no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 La Dirección de Gestión Humana tomará nota para los fines consiguientes. **Se declara acuerdo firme.**”

- 0 -

 El señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2020, presentó el siguiente recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que dice:

**“…**en tiempo y forma, de conformidad con los artículos 347 a 352 de la Ley General de la Administración Pública y 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **INTERPONGO RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 880-2020,** tomada en sesión 36-2020 del nueve de noviembre que dispuso:

*San José, 12 de noviembre de 2020*

*N° 888-2020*

*Al contestar refiérase a este # de oficio*

***Señora***

***MBA. Roxana Arrieta Meléndez***

***Directora interina de Gestión Humana***

***Estimada señora:***

*Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión* ***N° 36-2020*** *celebrada el* ***09 de noviembre del 2020,*** *que literalmente dice:*

***“ARTÍCULO XXVIII***

***Documento N° 1017-2020.***

*En oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, remitieron el siguiente informe:*

*“Para los efectos del conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, esta Dirección en fecha 13 de octubre de 2020, recibió la gestión del señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, mediante la cual solicita se le otorgue la pensión por el fallecimiento de su esposa la funcionaria judicial fallecida* *María Gabriela Calvo Ramírez, por lo que a continuación se procede a detallar:*

***I. Información personal y laboral de la señora María Gabriela Calvo Ramírez.***

*De conformidad con la información sustraída del Registro Civil, al momento de su deceso la servidora Calvo Ramírez contaba con 42 años, 10 meses y 17 días de edad.*

*Estado civil, casada.*

*Condición de nombramiento en el Poder Judicial, propietaria.*

*Tiempo servido, 19 años, 10 meses y 21 días.*

***II. Normativa que regula la gestión.***

*Ley N° 9544, Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, artículo 224:*

*“Los servidores judiciales* ***con veinte o más años de servicio en el Poder Judicial*** *podrán acogerse a una jubilación ordinaria igual a un ochenta y dos por ciento (82%) del promedio de los últimos veinte años de salarios mensuales ordinarios devengados en su vida laboral, actualizados según el índice de precios al consumidor (IPC), definido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),* ***siempre y cuando hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan trabajado al menos treinta y cinco años.”*** *(Énfasis agregado).*

*Artículo 229:*

*[…] “En caso de* ***muerte de un servidor activo****, la cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al* ***monto de pensión que hubiera recibido el fallecido******de acuerdo con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia****…”. (Énfasis agregado).*

***III. Conclusión.***

*Conforme la normativa que regula la solicitud del señor Camacho Alpizar y del análisis de los antecedentes laborales y personales de la señora María Gabriela Calvo Ramírez al momento de su deceso, se verifica que la exservidora no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 224 para aprobar un derecho de jubilación, lo cual por consiguiente; no permite desde el componente legal de la solicitud, acceder a la determinación de un monto de pensión.*

*De esta forma, se pone en conocimiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la gestión presentada por el señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, para su atención.*

*(…).”*

*- 0 -*

***Se acordó por unanimidad:*** *En razón de lo indicado en oficio número PJ-DGH-AP-4035-2020 del 19 de octubre de 2020, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, el licenciado Carlos Lizano Alfaro y la licenciada Leda Córdoba Montero, por su orden, Subdirectora interina de Gestión Humana, Jefe interino de Administración de Personal y Coordinadora de la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, informar al gestionante señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, que no es posible acoger lo que solicita debido a que, en su caso, no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.*

*La Dirección de Gestión Humana tomará nota para los fines consiguientes.* ***Se declara acuerdo firme.***

***Atentamente,***

***Licda. Lucrecia Ruiz Rojas, Secretaria***

***Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial***

*Cc:*

*Sr. Paulo Agustín Camacho Alpizar*

*Diligencias / Refs: (****1017-2020****)*

***Naguilars***

El motivo que sustenta mi reclamo lo baso en las siguientes razones:

 1- La resolución dictada adolece del requisito de falta de fundamentación, elemento esencial al que se encuentra obligada la Administración Pública sin excepción **a tal extremo que ni siquiera consigna de manera correcta la edad y el tiempo servido por mi difunta esposa.**

**2-** En la resolución que impugno se afirma que mi difunda esposa María Gabriela Calvo Ramírez: “*De conformidad con la información sustraída del Registro Civil, al momento de su deceso la servidora Calvo Ramírez contaba con 42 años, 10 meses y 17 días de edad”.* Ese dato es falso, como podrá comprobarse en el Registro Civil, mi esposa no contaba con 42 años, 10 meses y 17 días de edad el día de su fallecimiento. **Mi esposa tenía 43 años, ocho meses y 17 días de edad cuando falleció:**

( … )

3- Para el momento de su fallecimiento, mediante constancia emitida por el Departamento de Gestión Humana aportada en autos, se hace constar el 7 de octubre de 2020: *Que revisados los índices respectivos que para tales efectos se llevan en esta dirección, la señora MARÍA GABRIELA CALVO RAMÍREZ cédula de identidad (valor) labora para este Poder Judicial desde el* ***día lunes 5 de agosto de 1996.*** *Su condición en el Poder Judicial es de Propiedad. Actualmente desempeña el cargo de DEFENSOR PÚBLICO en la oficina DEFENSA PÚBLICA QUEPOS.*

 4- Que, en mi condición de cónyuge supérstite, ya que contraje matrimonio con ella el 18 de diciembre de 2004 cumplo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley. Sobre la condición de matrimonio, oportunamente fue aportado, pero igualmente consta en el Registro Civil:



5- Que, debido a su grave enfermedad, yo no pude laborar ya que me dediqué exclusivamente a su cuido por lo que dependía económicamente de ella.

6- Además, ella laboró como meritoria en el Poder Judicial desde el año 1993, en la Fiscalía de Quepos, por lo que su tiempo de antigüedad es mucho mayor al indicado.

7- Entre los antecedentes que puedo señalar constan los siguientes:

**a- Según acta del Consejo Superior 53-2002, mi difunta esposa fue nombrada en propiedad del 23 de julio de 2002, fue nombrada en propiedad como auxiliar judicial 2:**

*ARTÍCULO XI*

*Con vista en las proposiciones incluidas en la nómina elaborada por el Departamento de Personal, se acordó aprobar en propiedad los siguientes nombramientos:*

*A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DEL 2002*

*MINISTERIO PÚBLICO*

*1.- Martínez Loría Armando Fabián, cédula N°* (valor)*, Auxiliar de Servicios Generales 2, Terna N° 355-2002.*

*ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL*

*SECCIÓN DE INSPECCIONES OCULARES Y RECOLECCIÓN DE INDICIOS*

*2.- Sibaja Zamora Nilce, cédula N°* (valor)*, Investigador 1, Terna N° 344-2002.*

*DIRECCIÓN EJECUTIVA*

*SECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL*

*3.- González Quirós Sarita, cédula N°* (valor)*, Auxiliar Supernumerario 1, Terna N° 353-2002.*

*OFICINA ADMINISTRATIVA DE TRIBUNALES DE SAN JOSÉ*

*4.- Espinoza Mayrena Justina, cédula N°* (valor)*, Auxiliar de Servicios Generales 2, Terna N° 372-2002.*

*5.- Hernández Sandí Gregorio, cédula N°* (valor)*, Auxiliar de Servicios Generales 2, Terna N° 371-2002.*

*JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA DE HATILLO*

*6.- Sibaja Hernández Anthony, cédula N°* (valor)*, Notificador 1, Terna N° 363-2002.*

*JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ*

*7.- Muñoz Ramírez María Alexandra, cédula N°* (valor)*, Auxiliar Judicial 2, Terna N° 360-2002.*

*JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DE TURNO EXTRAORDINARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ*

*8.- Reid Reveorlley Chiara J., cédula N°* (valor)*, Auxiliar Judicial 2, Terna N° 361-2002.*

*UNIDAD DE LOCALIZACIONES, CITACIONES Y PRESENTACIONES DE AGUIRRE Y PARRITA*

*9.- Vásquez Cruz Róger, cédula N°* (valor)*, Oficial de Localizaciones, Terna N° 346-2002.*

*DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO*

*10.- Montenegro Flores Elisa V., cédula N°* (valor)*, Auxiliar Administrativo 2, Terna N° 312-2002.*

*A PARTIR DEL 1° DE SETIEMBRE DEL 2002*

*ESCUELA JUDICIAL*

*11.- Acuña Vega Óscar, cédula N°* (valor)*, Auxiliar de Servicios Generales 2, Terna N° 354-2002.*

*JUZGADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ*

*12.- León Pérez Gerardo, cédula N°* (valor)*, Auxiliar de Servicios Generales 2, Terna N° 352-2002.*

*JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ*

*13.- Cordero Vargas Kattia, cédula N°* (valor)*, Auxiliar Judicial 1, Terna N° 348-2002.*

*JUZGADO DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA*

*14.- Fernández Molina María, cédula N°* (valor)*, Auxiliar Judicial 2, Terna N° 291-2002.*

*JUZGADO PENAL DE AGUIRRE Y PARRITA*

*15.- Calvo Ramírez María Gabriela, cédula N°* (valor)*, Auxiliar Judicial 2, Terna N° 362-2002.*

*A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DEL 2002*

*UNIDAD DE LOCALIZACIONES, CITACIONES Y PRESENTACIONES DE SAN JOSÉ*

*16.- Hernández Obando Rodrigo, cédula N°* (valor)*, Oficial de Localizaciones, Terna N° 323-2002.*

*- 0 -*

*Los servidores Martínez Loría, Acuña Vega, González Quirós, Espinoza Mayrena, Hernández Sandí, Hernández Obando, León Pérez, Muñoz Ramírez, Reid Reveorlley, Fernández Molina, Calvo Ramírez, Vásquez Cruz y Montenegro Flores se presentarán al Servicio Médico para los servidores judiciales, a efecto de que se les practique el reconocimiento respectivo, para lo que concertarán la cita en forma personal, o por vía telefónica en la extensión 3572. El Departamento de Personal y el Servicio Médico tomarán nota de lo resuelto para los fines consiguientes.*

**b- Según la constancia aportada por Gestión Humana del 5 de agosto de 1996 al 14 de diciembre de 2007 que renunció a su puesto propiedad mi difunta esposa YA TENÍA ONCE AÑOS, CUATRO MESES Y NUEVE DÍAS DE SER FUNCIONARIA.**

**c- A PARTIR DE SU REINCORPORACIÓN COMO DEFENSORA PÚBLICA DESDE AGOSTO DEL AÑO 2010, SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DEFENSORA PÚBLICA EL PRIMERO DE MAYO DE 2015, HASTA LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO, EL 25 DE SETIEMBRE DE 2020, EL TIEMPO LABORADO PARA LA INSTITUCIÓN SUPERA LOS VEINTE AÑOS QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN.**

Es evidente que la resolución que impugno me causa un gravamen irreparable al denegar el derecho a la pensión por viudez que establece la normativa actual, **al que tengo derecho y por lo que mi esposa laboró POR LO QUE SOLICITO LA REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.”**

- 0 -

**Se acordó: 1)** Tener por conocida la gestión del señor Pablo Agustín Camacho Alpizar, cónyuge de la servidora judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez. **2)** Previo a resolver el recurso de revocatoria, remitir la gestión a la Dirección de Gestión Humana para que en el plazo de 8 días hábiles se refiera a las manifestaciones del señor Camacho Alpízar. **3)** Asimismo, se sirvan agregar el récord de nombramientos de la persona en estudio con el fin de que se constate el tiempo servido para efectos de anualidades y para efectos de jubilación. **Se declara este acuerdo firme.**”

- 0 -

Informa la Secretaría General de la Corte que, aún no se tiene respuesta de lo solicitado en el acuerdo anteriormente transcrito.

- 0 -

**Se acordó por unanimidad**: Solicitar a la Dirección de Gestión Humana que remita el informe solicitado por esta Junta Administradora en sesión N° 38-2020 celebrada el 23 de noviembre de 2020, artículo XIV, en el plazo de 5 días hábiles a partir de comunicado el presente acuerdo, lo anterior, con la finalidad de resolver la gestión presentada por el señor Pablo Agustín Camacho Alpizar, cónyuge de la servidora judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez. **Se declara acuerdo firme**.”

- 0 -

El señor Pablo Agustín Camacho Alpizar, cónyuge de la servidora judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez, en correo electrónico de 19 de abril de 2021, remitió lo siguiente:

“Con referencia, a los correos electrónicos, sumidos a este y en relación con la Referencia del caso N° 17845-2020 del 13/10/2020, gestión de Pensión por Fallecimiento de la Licda. Maria Gabriela Calvo Ramirez, a favor de su esposo Dependiente Sr. Pablo Camacho Alpizar, ref **1017-2020.**

**Deseo de la forma más respetuosa posible, interpongan sus buenos oficios, para darle una favorable y pronta resolución, a las gestiones realizadas a mi Favor, como bien pueden apreciar, en la declaración Jurada, que a razón de Último deseo, mi Esposa quiso fuera anexada a estas gestiones, mi situación devenida de mi total dedicación a mi Esposa en los últimos 10 años, que me impidió trabajar, y me obligó a vender todos mis activos, para procurarle a ella, la mejor de las atenciones, ha decaído, ya, en la extinción de todos mis ahorros y a la fecha, ante la ausencia, de la resolución, de los tramites aquí solicitados y de otros relativos , también con la Dirección de Gestión Humana,(ref-2743-21, trámite de prestaciones legales) me están arrinconando ya a una situación, muy difícil de soportar, económica y psicológicamente, por lo que de verdad les estaría muy agradecido, de poder resolver algo, que me pueda dar un respiro en estos 7 meses de zozobra y angustia, que no han parado desde el fallecimiento de mi Señora Esposa”.**

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tomar nota de la comunicación realizada por el señor Pablo Agustín Camacho Alpizar, en correo electrónico de 19 de abril de 2021. **2.)** Comunicar al señor Camacho Alpízar que las gestiones que correspondía a esta Junta Administradora ya han sido resueltas y únicamente está pendiente lo correspondiente a dar respuesta al recurso de revocatoria y por tal razón se comunicará de su solicitud relacionada con el trámite de las prestaciones legales de la causante María Gabriela Calvo Ramírez, a la Dirección de Gestión Humana para lo que a esa oficina corresponda.”

- 0 -

Conoce este órgano en alzada del Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Paulo Agustín Camacho Alpízar, en su condición de cónyuge supérstite de quien fuera funcionaria judicial fallecida María Gabriela Calvo Ramírez

**RESULTANDO**

I.- El señor Camacho Alpízar solicita pensión por viudez el día trece de octubre del año dos mil veinte de quién fuera su esposa María Gabriela Calvo Ramírez, ante el Departamento de Gestión Humana.

**II.-** El Departamento indicado en el resultando anterior, mediante oficio No PJ-DGH-AP-4035-2020 del diecinueve de octubre del año dos mil veinte, rechazó la solicitud de pensión del señor Camacho Ramírez, concluyendo para tal denegatoria, que la funcionaria fallecida no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley No 9544, específicamente en lo preceptuado en el numeral 224 sea el no haber laborado veinte o más años en el Poder Judicial.

**III.-** Inconforme con lo resuelto, interpone recurso de apelación contra dicho acuerdo, remedio procesal que conoce este órgano en alzada por imperativo de ley.

**CONSIDERANDO**

**I.- HECHOS PROBADOS.-** De importancia para la resolución de este asunto se tienen como demostrados los siguientes hechos demostrados: 1- La señora María Gabriela Calvo Ramírez era la esposa del señor Paulo Agustín Camacho Alpizar, no constando a la fecha separación judicial como tampoco divorcio. ( ver constancia digital del matrimonio celebrado el día dieciocho de diciembre del año dos mil cuatro en la ciudad de Santo Domingo de Heredia). 2.- El día veinticinco de setiembre del año dos mil veinte, fallece la funcionaria judicial Calvo Ramírez. ( ver acta de defunción digital). 3.- Ante este hecho, su esposo solicita el beneficio de pensión por viudez el día trece de octubre del año dos mil veinte ante el Departamento de Gestión Humana.( los autos). 4.- En Oficio No PJ-DGH-AP-4035 de fecha diecinueve de octubre de ese mismo año, se rechaza la solicitud presentada, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley, sea el haber laborado veinte o más años para el Poder Judicial. ( artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)- 5.- Inconforme con lo resuelto, el día diecisiete de noviembre del año dos mil veinte, don Paulo interpone los recursos de revocatoria y apelación contra la denegatoria de su solicitud de pensión como esposo de la funcionaria fallecida Calvo Ramírez. ( los autos). 6.- En Oficio No 2027-2020, la Dirección de Gestión Humana rechaza el recurso de revocatoria y eleva los autos ante esta Junta con el fin de que resuelva la apelación interpuesta por el señor Camacho Alpízar.

**II.- LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE.-** El apelante Camacho Alpízar, inconforme con lo resuelto, interpone recurso de apelación, contra la resolución que deniega el derecho pretendido de pensión de su difunta esposa María Gabriela Calvo Ramírez, cuyos fundamentos mediante los cuales funda este recurso son los siguientes: Estima la existencia de una falta de fundamentación de la resolución impugnada, pues no consigna de manera correcta la edad y el tiempo servido por su difunta esposa en el Poder Judicial. Arguye que la edad de su esposa al momento en que acaeció su muerte era de cuarenta y tres años, ocho meses y diecisiete días y no como se consignó en la resolución recurrida. Estima además que de la prueba que obra en los autos, su esposa labora para el Poder Judicial desde el día lunes cinco de agosto del año mil novecientos noventa y seis, y su condición es de propiedad, desempeñándose al momento de su deceso como Defensora Pública en la oficina de la Defensa de Quepos. Que en su condición de cónyuge supérstite, ya que contrajo matrimonio con la señora Calvo Ramírez el día dieciocho de diciembre del año dos mil cuatro, cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley. Alega que por la grave enfermedad de su esposa, dejó de laborar y dependía económicamente de ella. Además ella laboró como meritoria en el Poder Judicial desde el año 1993, en la Fiscalía de Quepos, por lo que su tiempo de antigüedad es mucho mayor al indicado. Fue nombrada en propiedad como auxiliar judicial 2 el 23 de julio del año 2002; y a partir del primero de octubre de ese mismo año en la Unidad de Localizaciones y Citaciones y Presentaciones de San José. Indica que, según la constancia aportada por la Gestión Humana del 5 de agosto del año 1996 al 14 de diciembre del año 2007que renunció a su puesto propiedad mi difunta esposa ya tenía once años, cuatro meses y nueve días de ser funcionaria. A partir de su reincorporación como defensora pública desde agosto del año dos mil diez su nombramiento en propiedad como Defensora Pública el primero de mayo de año 2015, hasta la fecha de su fallecimiento, el veinticinco de setiembre del año 2020. Así el tiempo laborado para la institución supera los veinte años. Por todo lo anterior solicita se acoja el recurso y se revoque la resolución impugnada, y se otorgue el derecho de pensión de su esposa.

**III.- ANÁLISIS DEL CASO BAJO ESTUDIO.-** El primer agravio del recurrente constituye un error material, el cual ya fue aclarado en el Oficio No PJ-DGH-AP-4651-2020 del seis de enero del año en curso, mediante el cual se corrigió la edad de la causante, la cual es de cuarenta y tres años, ocho meses y diecisiete días de edad al momento de su fallecimiento, y no como se consignó de cuarenta y dos años diez meses y diecisiete días. El segundo motivo hace referencia al tiempo durante el cual la señora Calvo Ramirez laboró para el Poder Judicial, donde a criterio del recurrente sobrepasa el tiempo servido de los veinte años y por ende se hace beneficiario de la pensión, al ser él el único acreedor o favorecido de tal derecho. Cabe señalar que, efectivamente la doña María Gabriela laboró con el Poder Judicial desde el día cinco de agosto del año dos mil seis, y que a su inicio ingresó como meritoria. Esta condición de funcionario se basa en una relación de prestación de servicios iniciada por voluntad de la persona física, sin que exista entre las partes una relación laboral estrictu sensu, por ello no existe salario, subordinación y menos cotización al régimen de pensiones que para aquel momento toda persona trabajadora con nombramiento debía cotizar de contar con un nombramiento. El meritenazgo es una situación particular que se dio en un momento dado, donde la persona ingresaba al Poder Judicial con el fin de aprender y conocer del funcionamiento de las diversos órganos del Poder Judicial, pero de manera alguna implicaba una relación de servicio entre las partes. ( ver Circular No 005-29013 del Consejo Superior); ratificando lo indicado en líneas anteriores de la inexistencia de una relación laboral entre el Poder Judicial y la persona meritoria. Así las cosas, el tiempo mediante el cual la doña María Gabriela fungió como meritoria no puede computarse para efectos de años de servicio ni mucho menos de años cotizados para el régimen. De igual manera los períodos donde solicitó permisos sin goce de salario porque en ellos la relación laboral está suspendida, y no existen obligaciones entre las partes, ni cotización alguna tampoco al régimen de jubilaciones. Así también consta en los autos que la señora Calvo Ramírez renunció a su puesto en el Poder Judicial del período que va del catorce de diciembre del año dos mil siete al cuatro de agosto del año dos mil diez, donde de igual manera no cotizó para el régimen de jubilaciones, por lo que no es cierto como consta de la prueba traída al proceso que a la fecha de la renuncia contaba con once años cuatro meses y nueve días de laborar para el Poder Judicial. La relación de servicio se reanuda por nombramiento a partir del cuatro de agosto del año dos mil diez, siendo nombrada en propiedad el primero de mayo del año dos mil quince y fenece el veinticinco de setiembre del año dos mil veinte cuando muere. En consecuencia, si deducimos los períodos en que no cotizó al régimen por encontrarse de meritoria, y los que estuvo fuera del Poder Judicial por renuncia, junto con los permisos sin goce de salario que ascienden estos últimos a trescientos sesenta y seis días; doña Gabriela no contaba al momento de su fallecimiento con veinte o más años de servicio y por ello no cabe conceder el beneficio de pensión a su esposo, pues uno de los requisitos indispensables para tal conferimiento es el tiempo de servicio, sean veinte o más años, y que en este caso la actora solamente tenía de laborar para el Poder Judicial diecinueve años, diez meses y veintiún días de manera discontinua. Por ello, no existe la falta de fundamento o motivación de la conducta administrativa dictada; vicio alegado por el recurrente en su recurso, y por ello lo resuelto por la instancia inferior debe ser confirmado, rechazando el recurso de apelación interpuesto.

- 0 -

Por lo anteriormente expuesto, **se acuerda por unanimidad**: **1.)** Se deniega el recurso de apelación interpuesto por el señor Pablo Agustín Camacho Alpízar y se confirma en todos sus extremos la resolución PJ-DGH-AP-4035-2020 del diecinueve de octubre del año dos mil veinte. **2.)** Se le informa al gestionante que el presente acto agota la vía administrativa. **3.)** Hacer el presente acuerdo de conocimiento del señor Camacho Alpízar.**”**

- 0 -

Mediante nota recibida el 4 de junio de 2021,el señor Paulo Agustín Pablo Camacho Alpízar, comunicó:

“…acudo nuevamente con la finalidad de solicitar la revisión del acuerdo Res N° 73-2021, en la que se deniega la pensión por sobrevivencia mediante la aplicación de un artículo declarado inconstitucional en su voto 1197-2021 y dado a conocer al público general mediante numerosos reportajes al respecto, por lo cual y debido a que dicha resolución, atañe directamente a la materia sobre la que versa el presente reclamo y a los derechos de los funcionarios que la conocen me parecería inverosímil que les fuese desconocida, por lo pese a que dicho acto, fuese dictado en fecha anterior al voto que lo declara inconstitucional, el mismo no produce efecto, hasta su comunicación el 2 de junio de los corrientes a las 14:00 hrs, )art. 140 Ley General de la Administración Pública) su licites por lo tanto. En este acto hago el formal reclamo de revisión y aclaración, reservándome la potestad de acudir a la vía penal por la comisión de delito de prevaricato que según la legislación penal indica en el artículo 357: *“Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores”*.

Ante la incompresible situación a la que me enfrento, donde se han violentado mis derechos en clara violación al principio Legalidad, me es menester, recordarles, que los actos dictados en esta resolución N° 73-2021, configuran los presupuestos indicados en los artículos N° 211 de la Ley General de la Administración Pública y artículo N° 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por lo que también me reservo el…

La respuesta a esta gestión es esencial para sentar responsabilidades penales, administrativas y civiles, ya que, mediante la aplicación de una norma derogada, esta Junta de manera deliberada y con el fin de perjudicarme y obligarme a realizar un proceso contencioso está precediendo de mala fe.

Al imponerme la obligación de invertir dinero que no tengo en este momento, para acudir a un proceso contencioso a sabiendas de su ilegalidad, tengo el derecho. Si el fundamento legal para denegar mi derecho a pensión por supervivencia, es la normativa que estipula los 20 años de servicio, ya que reitero, esa norma de manera pública y notaria fue declarada inconstitucional manteniéndose el requisito de los diez años, lo procedente es que esta Junta procesa conforme a derecho, y, con diligencia y empatía, modifique de forme inmediata este acto administrativo, que violenta mi derecho a la pensión de sobrevivencia, fruto de más de veinte años de servicio de mi difunta esposa, de mantener su actuación solicitó que me sea comunicado por escrito.

Debo agregar, de forma muy personal, que según reza el art. N° 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la junta, no está exenta de la fiscalización que dicta la jurisdicción común y en este caso ha obrado con una displicencia, difícil de entender, ante el legado de una funcionaria fallecida, honrada por la Corte Suprema de Justicia en oficio N° 9253-2020, esta actitud de la Junta me parece poco ética, inhumana y carente de la más mínima empatía.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por conocida la nota remitida por el señor Pablo Agustín Camacho Alpízar, en fecha 4 de junio de 2021, mediante la cual se refiere a la sentencia N° 2021-1197 de la Sala Constitucional. **2.)** Comunicar al señor Camacho Alpizar que cuando esta Junta Administradora tomó el acuerdo respecto a la gestión no había sido declarada la inconstitucionalidad que señala y se está a la espera de ser notificada del texto completo de la resolución de la Sala Constitucional para proceder conforme a derecho corresponda. **3.)** En sesión N° 24 del 07 de junio de 2021, esta Junta Administradora solicitó al Departamento de Trabajo Social y Psicología que dé inicio a los estudios socioeconómicos de las personas que se encuentran en la condición del señor Camacho Alpizar, por lo que una vez se cuente con dicho estudio y con la sentencia completa se tomará el acuerdo pertinente.”

- 0 -

En respuesta al antecedente anterior, el señor Pablo Agustín Camacho Alpízar, remitió nota del 23 de junio de 2021, el cual se adjunta a continuación:



**Asimismo, adjunto los siguientes documentos:**



- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por conocida la gestión del señor Pablo Agustín Camacho Alpízar, mediante nota remitida el 23 de junio de 2021, mediante la cual solicita se aclaren los alcances del oficio N° 600-2021, de sesión N° 25 del 14 de junio de 2021. **2.)** Aclarar al señor Camacho Alpízar, que el acuerdo denegatorio tomado por esta Junta en sesión N° sesión N° 36-2020 celebrada el 09 de noviembre del 2020, artículo XXVIII, fue tomado conforme a derecho; bajo la ley que se encontraba vigente y bajo los elementos aportados en ese momento, y por tal motivo lo que corresponde es que cuando las circunstancias cambien, conforme a la acción de inconstitucionalidad, una vez sean notificados por parte del Órgano Constitucional, esta Junta procederá con lo que corresponda ante la eficacia del acto y sus efectos jurídicos.

## ARTÍCULO VI

**Documento Nº 619-2021 / 863-2021**

En sesión N° 23-2021 celebrada el 31 de mayo de 2021, artículo XXII, por unanimidad, se tuvo por conocido el informe remitido por el máster Oslean Mora Valdez, Director interino de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, mediante correo electrónico del 26 de mayo de 2021, mediante el cual resume las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Sala Constitucional. Y se dispuso a estar a la espera de la notificación de la Sala Constitucional para que se determinaran las acciones por seguir por parte de esta Junta Administradora. Además, debía la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones tomar nota de los ajustes que se debería efectuar respecto de lo resuelto por el Órgano Constitucional.

- 0 -

El máster Miguel Ángel García Martínez, Abogado, mediante nota del 27 de junio de 2021, comunicó:

“Le saludo cordialmente y le pido, de forma encarecida y respetuosa, que se sirva leer la presente con mente amplia y bondad, así como en forma crítica.

Me permito solicitarle el que pida aclaración del por tanto de la de inconstitucionalidad tramitada bajo la sumaria: 18-007819-0007-CO, sentencia: 00111957, del 25 de mayo de 2021.

Mi petición, se origina o deriva del siguiente párrafo en el por tanto indicado:

**“...se anula el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria y redistributiva en cuanto excedan el 50% del monto bruto de la pensión que corresponde a la persona jubilada o pensionada..., la Sala gradúa y dimensiona los efectos de esta resolución, de modo que, a partir del mes siguiente de la notificación de la sentencia, las autoridades competentes deberán realizar el ajuste correspondiente conforme a esta sentencia, de manera tal que las cargas tributarias que pesan sobre el monto de las jubilaciones y pensiones no excedan del 50% ...”**.

Como se observa, cuando el por tanto indica: “se anula el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria y redistributiva en cuanto excedan…”. En definitiva tal afirmación se refiere al artículo: 236 in fine de la ley 7333 del año 1993 y sus reformas, sea comprende la reforma que se hizo en la ley 9544, que vino a reformar el régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, en el sentido de que ya no se deducirá como máximo un 55%, según ahí está dispuesto. De igual forma, al parecer debemos entender, se entiende que dicho nuevo porcentaje es aplicable al párrafo final del artículo 236 bis, que dice exactamente lo mismo que el párrafo final del artículo 236 (ver párrafo final del numeral236 y 236 bis según reforma, por ley 9544). En primer lugar quisiera hacer ver que la ley, en ambos párrafos finales (del artículo: 236 y 236 bis), que como dije son idénticos, en ningún momento habla de “cotizaciones”, así en plural, sino que indica: **“En ningún caso, la suma de la contribución obligatoria y la contribución especial solidaria, y redistributiva y la totalidad de las deducciones que se apliquen por ley a todos los pensionados…podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%)”**. Como dije la ley no habla de **“cotizaciones”** en plural, se entiende ahora que el máximo de deducciones a las prestaciones brutas que el jubilado o pensionado recibe no puede superar no ya el 55%, sino el 50%. El artículo en que se crea la contribución especial, solidaria y redistributiva, bis, dice: **“Además de la cotización común establecida en el artículo en el artículo 236 anterior, los pensionados y los jubilados, cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán de forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la siguiente tabla…”**. Si la ley dice que: otra , es decir : **“…además de la cotización común…”**, es porque existe otra, una extraordinaria; y la misma no es otra (ni puede ser otra) que la llamada: “contribución especial, solidaria y redistributiva. Es acorde con tal aserto la circunstancia de que en el párrafo final del artículo 236 y 236 bis, se habla de que la suma de la contribución obligatoria (común) y le adiciona (denotando su misma naturaleza) “… especial” …”, y luego el artículo refiere las demás deducciones y la contribución que se apliquen por ley (es decir las que son de diversa naturaleza) como lo son el cobro de la cuota o porcentaje de administración del fondo, caja del seguro, etc.; es decir las restantes deducciones que por ley se deben hacer. **Refuerza mi tesis de que la contribución especial, solidaria y redistributiva dispuesta en la ley es una cotización extraordinaria al fondo de pensiones (además de la cotización común se debe efectuar la misma), lo es el hecho de que la misma va a ir a engrosar los ingresos del mismo fondo de jubilaciones y pensiones;** es decir que la misma no va a ir a la caja única del Estado, a los fines de sufragar los gastos del mismo. Las cotizaciones al fondo, por supuesto que deben ir a engrosar al mismo, lógico. El monto y gradación de la cotización o cotizaciones, en nuestro caso, forman parte del régimen de jubilación y pensión dispuestas en la ley, constituyen obligaciones. Como ley y obligación, tiene vigencia a partir de su publicación. Entonces, recapitulando, **es claro que no puede indicarse en el fallo: “el porcentaje de cotizaciones y la contribución especial solidaria…”** hace que el contenido sea completamente turbio, es decir, al hablar de “cotizaciones” …”. Se acepta mi tesis de que hay una cotización común y otra más (mínimo dos). Tampoco se comprende: **¿Por qué diferencia esas cotizaciones (que son obligatorias para los que desean permanecer en el fondo) con la contribución especial solidaria, si ambas tienen igual naturaleza?** Continua el por tanto: **“… … las autoridades competentes deberán realizar el ajuste correspondiente conforme a esta sentencia de manera tal que las cargas tributarias que pesan sobre el monto de las jubilaciones y pensiones no excedan del 50% ...”**. Aquí la sentencia es completa mente oscura, cuáles son las autoridades competentes, por si fuera poco, mete todas las deducciones y las califica como cargas tributarias. Incluso me atrevo a afirmar que de mantenerse el fallo como está el mismo atenta contra la Constitución en forma gr osera. En primer lugar surge la pregunta: **¿Cuáles son las autoridades competentes?** . Es decir que persona, física o jurídica, tiene el derecho o la facultad, de realizar el ajuste, es decir, hacer que: **“…las cargas tributarias…”** Parece referirse a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial la palabra **“autoridad”** está referido a una persona que tiene un derecho o facultad. Pero lo cierto es que **la Junta no tiene el derecho o facultad de nada, la Junta Administradora del Fondo, sus integrantes, en su actuar, están vinculados por el principio de legalidad, es decir, sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les ordena, no es un derecho o facultad de la Junta el deducir el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ello es una obligación dispuesta en la ley de impuesto sobre la renta, que establece que los fondos de pensión deben recaudar, en la fuente, los mismos.** O debemos interpretar que la Sala, da la facultad, el derecho, a la Junta de recabar tributos (porque debe recabar el impuesto sobre la renta, la contribución a la Caja, o deducir las cotizaciones). No obstante, **el artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N. 7333 del año 1993, no establece en ninguna parte que es deber de la junta el recaudar tributo alguno, habla que debe deducir las cotizaciones. Se repite que la junta, en su origen o fuente, debe recauda r la renta, por disposición de ley. De igual forma no existe ninguna otra ley que permita a la Junta el recaudar ningún otro impuesto. ¿Son cargas tributarias, o se debe considerar como tributo, según el fallo de la Sala, la contribución especial, obligatoria, solidaria? ¿Es un tributo el pago que hacemos para la administración del fondo?** Quedemos por ahora con la primera pregunta, la segunda no es de interés por ahora. **En definitiva, la contribución especial, obligatoria, solidaria, no es un tributo, como ya dijimos anteriormente, es una cotización extraordinaria, a cargo de ciertos jubilados y pensionados. Refuerza nuestra tesis no sólo todo lo ya expuesto, sino también, y sobre todo, el hecho de que toda carga tributaria debe tener un hecho generador, que no viene a ser más que la fuente de la obligación** (pagamos la renta por que para producir una ganancia utilizamos los servicios, calles, etc.; pagamos la tasa municipal por recolección de basura; etc), **sin hecho generador se daría un enriquecimiento sin causa de la administración en la renta**, el hecho generador es existencia de una ganancia, por ejemplo; en la tasa la prestación de un servicio por la administración; en la contribución obligatoria , la prestación de un servicio, o realización de una obra que brinda una ventaja o beneficio a la persona (pero los jubilados, pensionados y trabajadores pagamos por la administración). En la ley 9544, en su exposición de motivos, no habla de que tal reforma tuviera fines fiscales, simplemente se buscaba reforzar el fondo, a los efectos de asegurar su permanencia. **Si bien la ley habla de una contribución especial, es en realidad una cotización extraordinaria, esa es su naturaleza jurídica. Si fuera un tributo, es lo cierto que, su recaudación debe estar dispuesta por ley, es decir que no podría la Junta Administradora del Fondo , proceder a recaudar la misma, pues entre sus facultades-deberes** (más bien) **no se encuentra el recaudar impuesto alguno, salvo, se repite, el impuesto sobre la renta.** La existencia del fondo y su manejo no es algo de por sí que produzca un beneficio o un perjuicio a las personas adscritas al régimen de pensión, puede suceder que el sujeto que se pensionó hoy mañana muera y no tenga herederos o esposa, por ejemplo. **El monto de aportes que puede retirar el sujeto si al llegar la hora de pensionarse desea pasarse a otro régimen de pensión es muy limitado, no se lleva el aporte estatal. El fondo puede tener perdidas o ganancias en sus operaciones bursátiles, pero eso no incrementa en nada la prestación a recibir, que ya estaba pactada. El fondo tiene su propio patrimonio, independiente del sujeto que se encuentra como jubilado, o pensionado, por cierto no paga renta, por disposición de ley. No se origina, como en todo tributo, un débito, o mejor, una obligación en el patrimonio del administrado, a su cargo y a favor de la administración (Estado), perseguible incluso a los herederos (lo que es propio de los tributos). La existencia del fondo de jubilaciones y pensiones, al que cotiza el funcionario activo, o el jubilado y pensionado, y además de forma especial el Estado (dando un poco más, o de forma diversa a lo que toca a otros regímenes de pensión) , no es en sí un servicio estatal, menos uno que brinde una ventaja indebida, o un beneficio a los que cotizan y están adscritos a tal régimen de pensión. (Puede uno, por ejemplo, morir antes de lograr jubilarse y no hay beneficiarios). Al pensionarse puede decidir irse y no puede llevarse las cuotas que pagó el Estado, etc. Por mucho que la Sala califique como un tributo la contribución obligatoria solidaria “tributo” como , el mismo no es tal, es una cotización extraordinaria, además de la común, a cargo de ciertos jubilados y pensionados. La utilización adecuada de los términos o conceptos, más en una sentencia , o por tanto , de tan alto tribunal, como lo es la Sala Constitucional, es una cuestión de mucha relevancia.** Es así que si se califica como tributo el pago de la contribución obligatoria solidaria creada en el artículo 236 bis, ello provocaría, por ser materia impositiva (de imperio) que el mismo entrará a regir a partir de su publicación y debería ser el mismo pagado (o deducido) a todos los jubilados y pensionados que se encuentren en la categoría o gradación de la tabla respectiva; sin importar si se jubilaron antes de la vigencia de la ley, por ejemplo: yo me pensioné en el 2015, a partir de la entrada en vigencia de la ley 9544 se me deduce esa contribución obligatoria solidaria, desde el 2018. Es claro que no puede alegarse que uno tiene derecho a que no se le cobre un tributo, por ser la ley o régimen con que se jubiló anterior, es decir no cabe alegar que se está aplicando en forma retroactiva la ley, pues antes no se cobraba la misma. No obstante, si se considera, como lo es, una cotización extraordinaria, la que forma parte del régimen de pensión, la obligación o vigencia de la ley también surgen a partir de su publicación, o de la fecha que 4la misma ley indique, pero no puede aplicarse dicha cotización a los que ya nos habíamos jubilado o pensionado con el régimen anterior, que tenía, por ley , otro tipo de cotización y forma de subir la misma.

**La Sala Constitucional no es quien para crear tributos, los tributos tienen reserva de ley en su creación y además solo la ley puede establecer quien está facultado para recaudar los mismos, la Sala no es quien para decir quien queda facultado, o tiene autoridad para recaudar un impuesto, tasa o contribución**. Ese, por tanto , es harto confuso y debe pedirse su aclaración.

Los que están obligados a cancelar esa contribución obligatoria solidaria son los que se pensionen con el nuevo régimen de pensiones, sea el impuesto en la ley 9544, que vino a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, N. 7333 del año 1993. Esa sentencia, por lo menos el por tanto con que contamos, además de ser harto oscura y confusa, me produce un gran perjuicio, puesto que yo vengo insistiendo en que la naturaleza jurídica de la contribución obligatoria, solidaria, especial, no es más que una cotización extraordinaria al fondo, no un tributo; por tanto todas las deducciones que se me han realizado a fin de cancelar ese rubro me deben ser devueltas y se debe ordenar a la Junta que se aplique a mi persona lo dispuesto en la ley 7333 del año 1993, sin que pueda aplicarse a mi régimen de pensión lo dispuesto en la ley posterior, en el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones dispuesto en la ley 9544 del año 2018.

Agradeciendo la atención, y en la esperanza de que soliciten aclaración a la Sala, aunque sea extemporáneamente, puesto que según la Ley de Jurisdicción Constitucional da facultad a la Sala de variar sus fallos, incluso en fase de ejecución…”

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Tener por conocida la gestión del máster Miguel Ángel García Martínez, Abogado, mediante nota del 27 de junio de 2021. **2.)** Se rechaza ad portas la gestión presentada por el máster García Martínez, toda vez que no se ha dictado por parte de esta Junta Administradora resolución alguna, por lo que debe dirigir la consulta ante el Órgano que redactó el voto constitucional; para efectos de que se pronuncie si corresponde la solicitud incoada.

## ARTÍCULO VII

**Documento Nº 414-2021 / 867-2021**

En sesión N° 23-2021 celebrada el 31 de mayo de 2021, artículo XVI, se tomó el acuerdo que dice:

“Mediante oficio N°PJ-DGTH-SAS-1453-2021, recibido el 18 de mayo de 2021, la máster Roxana Arrieta Meléndez y las licenciadas Olga Guerrero Córdoba y Maureen Siles Mata; por su orden, Directora interina de Gestión Humana, Subdirectora interina de Administración Humana y Jefa de Administración Salarial, comunicaron lo siguiente:

“En atención al acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión N° 12-2021 celebrada el 15 de marzo del 2021, artículo XVII, comunicado a la Dirección de Gestión Humana mediante oficio N° **313-2021**, mismo que señala:

*“****2.)*** *Solicitar a la Dirección de Gestión Humana que actualice el cálculo a valor presente del tiempo servido del jubilado fallecido Jorge Fournier Estrada, a fin de informarle posteriormente a la cónyuge sobreviviente si desea que se le reconozca ese tiempo servido para efectos de recalcularle el beneficio de la pensión, con la advertencia de que tendría que cancelar de previo el monto, para proceder al reajuste del beneficio.”*

Al respecto se procede a informar:

* El **artículo 6°** del “*Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial y en El Estado y sus Instituciones para Efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial”, señala que* la vigencia del reconocimiento de tiempo servido será a partir de la fecha en que la persona **cumpla** con los requisitos establecidos en dicho reglamento.
* Considerando esta disposición normativa, se procedió a revisar la gestión que da origen a este trámite de reconocimiento de tiempo servido, y se determina que la solicitud de este reconocimiento fue presentada por el jubilado fallecido Jorge Fournier Estrada el **31 de agosto de 2018**, fecha en la cual presentó y completó la documentación necesaria para llevar acabo el reconocimiento de tiempo servido para efecto de jubilación, pero que, por las múltiples diligencias que se han realizado para este caso a lo largo de este tiempo, no ha sido posible finalizar dicha gestión, por lo cual, de acuerdo a la norma se debe mantener el monto comunicado al Consejo Superior mediante oficio **N° 0413-UCS-AS-2019** del 1 de febrero de 2019.
* En ese sentido, nuevamente se remite el estudio de reconocimiento de tiempo servido en otras instituciones del Estado para efectos de *jubilación* **n° RTFJP: 2018121**, en razón que el mismo ya había sido **calculado a valor presente** al momento de la gestión realizada por el exservidor fallecidoFournier Estrada.

**Reconocimiento de Tiempo Servido en Otras**

**Instituciones del Estado para efectos de**

**JUBILACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE:** | JORGE ANTONIO FOURNIER ESTRADA | |
| **N° CEDULA:** | (Valor) | |
| **PUESTO:** | JUEZ 3 | |
| **OFICINA:** | JUZGADO PENAL I CIRC. JUD. ZONA ATLÁNTICA | |
| **LUGAR PARA NOTIFICACIONES:** | (Valor) | |
| **FECHA DE PRESENTACION DE LA GESTIÓN:** | 31/08/2018. | |
| **FECHA EN QUE COMPLETA LA GESTIÓN:** | **31/08/2018.** | |
| **RESULTADO DE ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO EN OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA EFECTOS DE ANUALES Y JUBILACIÓN:** | **N° DE RTFJP:** | **2018121** |
| **TIEMPO A RECONOCER:** | 1 año, 11 meses y 14 días. |
| **MONTO A REINTEGRAR:** | ¢4,399,977.98 |
| **INSTITUCIÓN DONDE LABORÓ:** | Instituto Nacional de Seguros - INS |
| **OBSERVACIONES:** | El Monto total Para Reintegrar se calcula a **valor presente** de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido en el Poder Judicial, en el Estado y sus Instituciones para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación en el Poder Judicial, artículos 12 y 13. | |

Así las cosas, se indica que, en caso de aprobarse el estudio **RTFJP 2018121,** el tiempo total a reconocer es de **1 año, 11 meses y 14 días**, tiempo por el cual la cónyuge sobreviviente deberá reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial un monto total de **¢4,399,977.98**,con la finalidad de que le sea ajustado el monto de la pensión que recibe como beneficiaria del exservidor fallecido Jorge Fournier Estrada.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Estudio RTFJP 2018121***  ***(documento)*** | ***Atestados***  ***(documento)*** | ***Respuesta de la persona servidora***  ***(documento)*** |

- 0 -

En sesión N° 12-2021 celebrada el 15 de marzo de 2021, artículo XVII, se solicitó a la Dirección de Gestión Humana que actualizara el cálculo a valor presente del tiempo servido del jubilado fallecido Jorge Fournier Estrada, a fin de informarle posteriormente a la cónyuge sobreviviente si deseaba que se le reconociera ese tiempo servido para efectos de recalcularle el beneficio de la pensión, con la advertencia que tendría que cancelar de previo el monto, para proceder al reajuste del beneficio.

Posteriormente, en sesión N° 19-2021 del 10 de mayo de 2021, artículo XXII, se tuvo por conocida la gestión de la señora Cecilia Acuña Centeno, en correo electrónico del 21 de abril de 2021. Se comunicó a la señora Acuña que en virtud de que la gestión se hizo posterior al Reglamento para el Reconocimiento de Tiempo Servido, cuya modificación se realizó en el año 2014, debe aplicársele el reconocimiento de tiempo servido a valor presente. Así mismo, se solicitó a la Dirección del Fondo para que coordinara la realización de un escenario de cómo le hubiese quedado la jubilación al señor Fournier Estrada en caso de reconocer el tiempo servido en discusión y de ahí el cálculo del beneficio de pensión a la señora Acuña y lo hiciera de conocimiento de la gestionante, para su valoración.

**Por unanimidad,** **se acordó:** **1.)** Tomar nota del oficio N° PJ-DGTH-SAS-1453-2021, Dirección de Gestión Humana, relativo a los cálculos del monto que se debería reintegrar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, por la señora Cecilia Acuña Centeno, en caso de que sea de su interés que se le ajuste el monto de la pensión que recibe como beneficiaria del exservidor fallecido Jorge Fournier Estrada. **2.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la señora Acuña Centeno para lo que estime pertinente **Se declara acuerdo firme.**”

- 0 -

La señora Cecilia Acuña Centeno, Pensionada Judicial, mediante correo electrónico del 28 de junio de 2021, comunicó:

“En relación con el oficio N° 545-2021 relacionado con la decisión de aceptar o no el ajuste de pensión motivado por el tiempo que mi esposo, Jorge Antonio Fournier Estrada, laboró en el INS, mucho apreciaré reconsiderar lo siguiente:

**1.** Aplicación de los artículos 6,12 y 13 del Reglamento de Tiempo Servido del Poder Judicial para efectos del Pago de Anualidades y Jubilación, **modificado en el año 2014.**

La Dirección de Gestión Humana estimó el monto de 4,399,977.98 asumiendo que fue el 31 de agosto 2018 que mi esposo inició el trámite de reconocimiento del tiempo laborado en el INS y que fue en esa fecha cuando "presentó y completó la documentación necesaria para llevar a cabo el reconocimiento de tiempo servido para efecto de jubilación" (Documento N° 414, 692-2021). Por tal motivo, efectuaron el cálculo al amparo del Reglamento antes citado, modificado en el 2014.

Con el debido respeto, estimo que se está en presencia de una confusión entre la fecha en que el Poder Judicial aprobó el reconocimiento del tiempo que mi esposo trabajó en el INS (setiembre1982) y la fecha en que él solicitó incluir ese reconocimiento en el cálculo del monto de pensión (agosto 2018), debido a:

**1.1** En **setiembre de 1982**, el Poder Judicial **aprobó y pagó** a mi esposo el tiempo que laboró en el INS, previa presentación de los documentos probatorios incluyendo en éstos la certificación del tiempo servido en el INS, porque de lo contrario no le hubieran reconocido esas anualidades. Asimismo, es en esa fecha cuando la Oficina de Personal debió haber solicitado a la CCSS el traslado de las cuotas y haber pedido a mi esposo cubrir el monto producto de la diferencia de los porcentajes de cotización entre ambos regímenes. Pero, como no lo hicieron, en agosto 2018 trasladan a mi esposo las consecuencias de la omisión en que incurrieron 36 años atrás, calculando esas cuotas a valor presente.

**1.2** En **agosto 2018** mi esposo tiene conocimiento de que las anualidades que le fueron **reconocidas desde 1982** no le estaban siendo consideradas en el cálculo de pensión, porque la Gestión Humana argumentó no haber localizado alguna acta o certificación emitida por el Consejo Administrativo o Corte Plena aprobando ese reconocimiento. Por tanto, es en esa fecha cuando mi esposo realiza la gestión para que, en el cálculo de pensión, le **incluyan o consideren las anualidades reconocidas** 36 años atrás y a solicitud de la Dirección de Gestión Humana, **nuevamente** presenta una certificación del tiempo servido en el INS, porque tampoco contaban con ella. Por tanto, la afirmación: "presentó y completó la documentación necesaria para llevar a cabo el reconocimiento de tiempo servido para efecto de jubilación" (Documento N° 414, 692-2021) no se ajusta a lo actuado y de hecho, la Gestión Humana no logró completar la información que en su momento estimó necesaria, pese a los múltiples esfuerzos que realizó ante el Archivo Nacional.

Con base en lo expuesto, estimo conveniente que la Dirección de Gestión Humana revise los actos en que fundamentó el cálculo de los 4,399,977.98, porque está partiendo de que fue el 31 de agosto 2018 la fecha en que mi esposo inicia o solicita el reconocimiento de esas anualidades. Además, tomar en consideración lo expresado el Presidente Magistrado Cruz en la página 22 del Oficio N° 890-2020 refiriéndose a las razones en que se fundamentó la Gestión Humana para no considerar esas anualidades en el cálculo de pensión: "Sí, en caso de existir duda razonable, que se realicen las gestiones para determinar la existencia de antecedentes de la decisión original, mediante su verificación en el Archivo Nacional, **pero sin cargar dicho deber al administrado y sin que el mismo pueda arrastrar las consecuencias de las deficiencias administrativas**". El resaltado no corresponde al original.

**2.** Cancelación **PREVIA** de 4,399,977.98.

La Junta condiciona mi decisión de aceptar el ajuste de la pensión, a una cancelación **previa** del monto establecido por la Unidad de Componentes Salariales.

Independientemente del pronunciamiento de la Dirección de Gestión Humana en torno al planteamiento de revisión del monto adeudado expuesto en el punto anterior, ustedes comprenderán que una decisión de este tipo debe fundamentarse en información y en el análisis de ésta. Por tanto, para poder darles a conocer mi posición a la mayor brevedad posible y no prolongar aún más esta gestión, estimo que lo procedente es que la Unidad de Cálculos de Beneficios me proporcione un estimado del monto que mi esposo, por las razones ya conocidas, dejó de percibir durante el tiempo en que estuvo jubilado (del 1° de enero al 11 de diciembre del 2019) y el reconocimiento de esa cifra, así como, informarme a cuánto ascendería el incremento mensual de mi pensión en caso de aceptar el ajuste, el cual regiría a partir del 12 de diciembre 2019.

De antemano agradezco la atención y comprensión que se sirvan prestar.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad: 1.)** Tener por conocida la gestión presentada por la señora Cecilia Acuña Centeno, Pensionada Judicial, mediante correo electrónico del 28 de junio de 2021, relacionada con el reconocimiento de tiempo servido. **2.)** Comunicar a la señora Acuña Centeno, que el beneficio de pensión no se reajusta en forma retroactiva, sino que se ajusta a partir del momento de la cancelación de la totalidad del monto adeudado por reconocimiento de tiempo servido. **3.)** Remitir el acuerdo a la Dirección de Gestión Humana, para que realice los estudios respectivos relacionados con las anualidades que le corresponderían al señor Fournier y que dicho estudio sea remitido a la Dirección de la Junta para que se realice el estudio completo, para ser conocido por esta Junta Administradora. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO VIII

**Documento N° 871-2021**

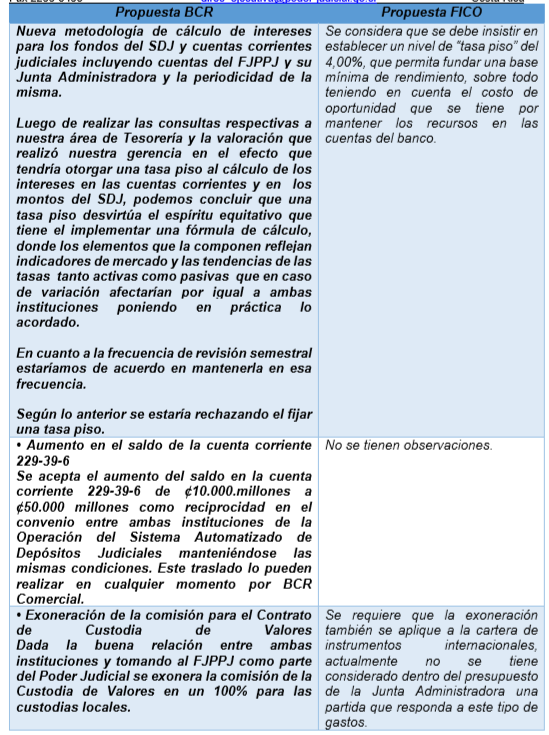
La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, en oficio N° 2096-DE-2021 de 28 de junio de 2021, dirigido al máster Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Gerente de Negocios de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, remitió lo siguiente:

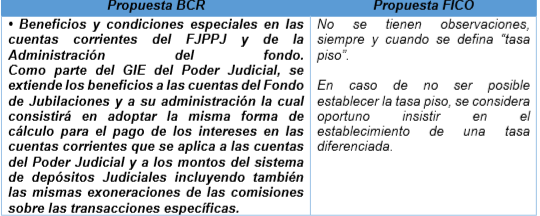
“En atención al contenido del oficio del 9 de junio del año en curso, por medio del cual da respuesta a las propuestas remitidas por el Poder Judicial para la suscripción de los convenios que regulen la relación entre ambas instituciones, se le comunica que esta Dirección Ejecutiva por medio del oficio N° 1985-DE-2021 del 18 de junio de 2001, pidió criterio a las áreas técnicas y financieras de la institución.

Al respecto, por medio del oficio 0306-TE-2021 del 25 de junio de 2021, suscrito por el máster Oslean Mora Valdez y el máster Miguel Ovares Chavarría, en su orden Director de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y Jefe del Departamento Financiero Contable, indican:

“Mediante oficio N°. 1985-DE-2021 recibido el 18 de junio de 2021 esa Dirección Ejecutiva traslada el oficio del Banco de Costa Rica sin número, de fecha 9 de junio del 2021, en este el citado Banco brinda respuesta a las propuestas efectuadas por la institución en el marco de la negociación del convenio interinstitucional (oficio N°. 1633-DE-2021), a partir de este documento se procede a realizar las observaciones en los temas atinentes:

Las anteriores recomendaciones son brindadas con el fin que se valoren, si a bien así lo estima, para la toma de decisiones del convenio interinstitucional con el Banco de Costa Rica.”





Esta Dirección Ejecutiva comparte las observaciones del anterior oficio y solicita de manera vehemente, sean reconsideradas por la entidad que usted representa, de manera que sea posible encontrar puntos de coincidencia para avanzar en la suscripción de los convenios, por lo que nuevamente se ofrece la opción de llevar a cabo una reunión para ampliar nuestros argumentos en los puntos indicados.

”



- 0 -

Asimismo, el máster Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Gerente de Negocios de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, en correo electrónico de 29 de junio de 2021, dirigido a la servidora Sofía Fallas Guzmán, Secretaria Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva, informó lo siguiente:

“damos por recibido las notas para nuestra valoración y comunicado a la Gerencia General, saludos.”

- 0 -

En sesión N° 13-2021 celebrada el 22 de marzo de 2021, artículo III, se tomó el acuerdo que en su parte dispositiva dice:

**“Se acordó: 1)** Tener por rendido el oficio N° 943-DE-2021 del 15 de marzo de 2021, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el cual adjunta el oficio de fecha 01 de marzo de 2021, en que el Banco de Costa Rica-BCR aclara sobre la composición de la fórmula de cálculo para el pago de intereses de los montos en colones y dólares propuestos por esa entidad para la suscripción de los convenios. **2)** Estar a la espera del pronunciamiento del Macroproceso Financiero Contable de la respuesta brindada por el BCR. **3)** Solicitar a la Comisión creada que se realice un estudio a fin de que recomiende a esta Junta lo que corresponda. **Se declara este acuerdo firme.”**

- 0 -

Luego, en sesión N° 23-2021 celebrada el 31 de mayo de 2021, artículo X, se tuvo por conocido el oficio N° 1633-DE-2021 del 19 de mayo de 2021, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el cual remitió copia del oficio remitido al máster Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Gerente de Negocios de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, con la propuesta del Poder Judicial en lo que corresponde al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Junta Administradora. Además se estuvo a la espera de la respuesta de la entidad bancaria a dicha propuesta.

Finalmente, en la sesión N° 26-2021 celebrada el 21 de junio de 2021, artículo XV, por unanimidad, se tuvo por recibida la nota suscrita por el señor Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Gerente de Negocios Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, mediante el 09 de junio de 2021, dirigido a la Dirección Ejecutiva y con copia a esta Junta. Además, se delegó a la Comisión que había definido esta Junta Administradora, conformada por los integrantes Carlos Montero Zúñiga, Ingrid Moya Aguilar y el Director de JUNAFO Oslean Mora Valdez, para que continuaran las gestiones de negociación con la Entidad Bancaria.

- 0 -

**Por unanimidad, se acordó:** Tener por conocido el oficio N° 2096-DE-2021 de 28 de junio de 2021, suscrito por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y dirigido al máster Juan Carlos Bolaños Azofeifa, Gerente de Negocios de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, relacionado con las observaciones para la suscripción de los convenios que regulen la relación entre ambas instituciones. **Se declara acuerdo firme.**

**ARTÍCULO IX**

**Documento N° 845-2021**

En sesión N° 18-2020 celebrada el 05 de marzo del 2020, artículo XLIV, se aprobó la propuesta planteada por la Dirección Jurídica, mediante oficio N° 390-DJ/CA-2020 del 7 de febrero de 2020, por lo que se autoriza a la citada Dirección, a que asuma como órgano director los procedimientos de cobros administrativos atinentes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

- 0 -

La máster Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica, mediante oficio N° 1584-DJ/CA-2021 del 16 de junio de 2021, hizo de conocimiento lo siguiente:

“Conforme a lo dispuesto por el artículo 239, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a esa Junta Administradora *“(…) Recaudar las cotizaciones que corresponden a ese Fondo y* *ejercer las acciones de cobro necesarias.”,* con base en ello, el Consejo Superior en sesión No.18-2020 del 5 de marzo de 2020, aprobó la propuesta planteada por esta Dirección Jurídica, mediante oficio No.390-DJ/CA-2020 del 7 de febrero de 2020 y autorizó que esta Dirección asumiera en calidad de órgano director, los procedimientos de cobro administrativo atinentes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, aquellos que mantiene en trámite y los que en el lapso de cooperación con esa Junta se inicien; así mismo, el Consejo Superior en sesión No. 25-2021 del 23 de marzo de 2021, artículo XLIX, ordenó a todas Direcciones del Poder Judicial atender los requerimientos de la Junta Administradora de manera directa y con la prioridad requerida, y de forma adicional en sesión No. 26-2021 del 6 de abril de 2021, artículo XXXI acordó “***2.)*** *Deberán las dependencias del Poder judicial mantener el apoyo que* *actualmente brindan a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder* *Judicial”.*

En atención a lo expuesto, nos permitimos informar que, mediante oficio del Departamento Financiero Contable N° 777-TE-2018 del 5 de junio de 2017, suscrito por la Licda. Ingrid Moya Aguilar, Jefa a.i. Subproceso de Egresos, la MBA. Floribel Campos Solano, Jefa de Proceso de Tesorería y el MBA. Miguel Ovares Chavarría, Jefe Macroproceso Financiero Contable, informa a la Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva el reporte de sumas giradas en demasía a la jubilada judicial señora Alexandra Morales Quesada, cédula de identidad (valor), y se detalla como deuda por cobrar la suma de *¢4.449.670,82 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta colones ochenta y dos céntimos)* correspondiente al período del 16 de setiembre al 23 de diciembre de2017, que laboró para la Universidad Politécnica Internacional UPI S.A, lo cual no podía realizar segúnlo establecido en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1994, vigente para aquelmomento, diligencias trasladadas para conocimiento de esta Dirección Jurídica por oficio N° 2654-DE-2018 del 6 de junio de 2018, remitido por parte la MBA. Romero Jenkins. Posteriormente por oficio N° 1747-TE-2018 del 4 de diciembre de 2018 el Departamento Financiero Contable solicita ajustar el monto inicialmente reportado con el monto correspondiente a aguinaldo 2017-2018 correspondiente a *¢252.082,04 (doscientos cincuenta y dos mil ochenta y dos colones cuatro céntimos),* desprendiéndose una suma total adeudada de *¢4.701.752,86 (cuatro millones setecientos un mil setecientos cincuenta y dos colones ochenta y seis céntimos).*

En razón de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y a efecto de realizar el procedimiento de cobro administrativo correspondiente, con motivo de la suma que se reporta fue girada en demasía, se solicita a esa Junta nombrar como **Órgano Director del Procedimiento** a la **Licenciada Flor Isabel Segura** **Chaves**, Asesora Jurídica del Área de Cobro Administrativo de la Dirección Jurídica, quien deberá realizar las diligencias de recuperación necesarias y hacer el envío a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de las resoluciones correspondientes a los actos administrativos competencia de ese órgano en su calidad de **Órgano Decisor**, diligencias correspondientes al **expediente No. 18-000443-1357-AD (B)**.

…”

- 0 -

Una vez analizada y discutida la gestión anterior, **Se acuerda por unanimidad**: **1.)** En razón de lo expuesto mediante oficio N° 1584-DJ/CA-2021 del 16 de junio de 2021, suscrito por la máster Argili Gómez Siu, Subdirectora Jurídica, designar como Órgano Director del Procedimiento a la licenciada Flor Isabel Segura Chaves, Asesora Jurídica del Área de Cobro Administrativo de la Dirección Jurídica, quien deberá realizar las diligencias de recuperación necesarias y hacer el envío a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. **2.)** La Dirección de JUNAFO tomará nota para los fines correspondientes. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO X**

**Documento N° 875-2021**

El máster Oslean Mora Valdez y el licenciado Fabián Salas, por su orden, Director interino de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y Jefe interino del Proceso Financiero, en oficio N° 022-PF-2021 de 29 de junio de 2021, en lo conducente, informaron que el MBA Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Administración de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), con oficio N.º GP-DAP-0535-2021, solicitó el traslado de las cuotas aportadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones Judiciales, del exfuncionario judicial Anibal Alberto Camacho Leiva. Lo anterior, conforme al detalle del documento adjunto.



- 0 -

Considerado el informe remitido por el máster Oslean Mora Valdez y el licenciado Fabián Salas, por su orden, Director interino de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y Jefe interino del Proceso Financiero, en oficio N° 022-PF-2021 de 29 de junio de 2021, **se acordó por unanimidad:**Tener por conocida la gestión de traslado de cuotas a favor del señor Anibal Alberto Camacho Leiva, al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y aprobarla, por la suma de ¢ 8,042,021.52 (ocho millones cuarenta y dos mil veintiún colones y cincuenta dos céntimos) y remitir al Proceso Financiero, para el trámite correspondiente. **Se declara acuerdo firme**.

**ARTÍCULO XI**

**Documento N° 116-2021 / 861-2021**

En sesión N° 17-2021 celebrada el 19 de abril del 2021, artículo VIII, se tomó nota del oficio N° SP-375-2021 del 12 de abril de 2021, remitido por el licenciado José Ezequiel Arias González, Jefe Área Comunicación y Servicios de la Superintendencia de Pensiones, en donde comunicó el monto a favor de la Superintendencia de Pensiones que sería acreditado el 22 de abril de 2021, por concepto de servicios de supervisión al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

En ese momento de dispuso que el Departamento Financiero Contable, debía tomar nota para lo que corresponda.

- 0 -

El licenciado José Ezequiel Arias González, Jefe del Área de Comunicación y Servicios de la Superintendencia de Pensiones, mediante oficio N° SP-647-2021 del 25 de junio de 2021, hizo de conocimiento lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el *Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las superintendencias*, seguidamente le comunico el monto de Ajuste Cobro final de 2020, por concepto de servicios de supervisión al ***Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial*.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monto por cobrar en el 2020 | Monto cancelado en el 2020 1/ | Diferencia |
| ¢19.007.374 | ¢18.851.779 | ¢155.595 |

Este monto considera los cobros efectuados de enero a noviembre de 2020 y el cobro final de 2020.

En línea con lo anterior, el monto a cobrar le será debitado el **7 de julio de 2021** de la cuenta IBAN autorizada, para lo cual se requiere que los recursos estén disponibles, a más tardar a las 3:00 p. m., el día citado.

…”

- 0 -

**Se acuerda por unanimidad**: **1.)** Tomar nota del oficio N° SP-647-2021 del 25 de junio de 2021, suscrito por el licenciado José Ezequiel Arias González, Jefe del Área de Comunicación y Servicios de la Superintendencia de Pensiones, donde indica el monto de Ajuste Cobro final del año 2020, por concepto de servicios de supervisión al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las superintendencia. **2.)** Deberá la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, tener el monto indicado en la cuenta IBAN autorizada, el 7 de julio de 2021**,** con la finalidad de que la Superintendencia de Pensiones, pueda realizar el débito correspondiente. **Se declara acuerdo firme**.

## ARTÍCULO XII

**Documento Nº 852-2021**

El servidor Luis Felipe Aguilar Castillo, Investigador de la Delegación Regional de Cartago, mediante correo electrónico del 24 de junio de 2021, presentó la siguiente gestión:

“…es para consultarles que debido a los cambio que ha generado la nueva ley de pensiones el cual vino en detrimento de los funcionarios públicos, la consulta va en el sentido habría la posibilidad de retirarme del régimen de pensiones del Poder Judicial y quedarme solamente con el IVM, por cuanto a mi parecer no me traería algún beneficio adicional.”

- 0 -

**Se acordó por unanimidad:** Indicarle al servidor Luis Felipe Aguilar Castillo, Investigador de la Delegación Regional de Cartago, que no es posible retirarse del régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, debido a que la permanencia en el mismo deriva de una disposición legal, véase el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **en donde literalmente dice:** *El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial tendrá los siguientes ingresos: 1) Un aporte obrero de un trece por ciento (13%) de los sueldos que devenguen los servidores judiciales, así como de las jubilaciones y las pensiones a cargo del Fondo, porcentaje que se retendrá en el pago periódico correspondiente…”.* en ese sentido, los aportes de las personas servidoras de este Poder de la República son fundamental para la sostenibilidad del nuestro fondo. Aunado a lo anterior, las actuaciones que se realicen relacionadas con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones deben estar apegadas al principio de legalidad, debido a que se rigen por el derecho público administrativo, así contemplado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, tomando en consideración que el ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que los funcionarios judiciales dejen de aportar para nuestro fondo. **Se declara acuerdo firme**.

**SALE DE LA SESIÓN EL INTEGRANTE SUPLENTE FREDDY CHACÓN ARRIETA.**

## ARTÍCULO XIII

**Documento N° 910-2021**

Mediante la sesión N°. 07-2021, artículo XXXI del 15 de febrero de 2021, la JUNAFO decide realizar cordial invitación a la MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins para su incorporación formal al Comité de Inversiones en calidad de integrante, según se puede apreciar a continuación:

***“Acuerda lo siguiente por unanimidad****: Invitar a la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, para que forme parte del Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la anterior invitación, se presenta debido a que este órgano valora la experiencia y conocimiento que posee en la materia, así como su carrera dentro de la institución.”*

- 0 -

Doña Ana Eugenia Romero Jenkins, mediante oficio N°. 751-DE-2021, responde a la invitación brindada manifestando su anuencia a participar, pero limitando la misma al momento de que se ejecute una adecuada separación de funciones que evite posibles conflictos de interés, según se puede apreciar a continuación:

*“En atención al acuerdo tomado por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en la sesión N° 7-2021 celebrada el 15 de febrero de 2021, artículo XXXIII, agradezco la invitación y con gusto me incorporaría a integrar el Comité de Inversiones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pero eso será posible una vez que la Dirección Ejecutiva no tenga ninguna participación en las labores de inversión de dicho Fondo, lo cual se espera ocurra en el corto plazo, con la conformación de la estructura organizacional del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.”*

- 0 -

De tal manera, con la integración de la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial conforme acuerdo tomado por el honorable Consejo Superior en sesión N°. 26-2021, artículo XXXI, del 06 de abril de 2021, es a partir del a partir del 15 de abril de 2021 que las labores operativas relacionadas con la administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se retiran de la Dirección Ejecutiva y del Macroproceso Financiero Contable, para ser trasladas a esta nueva oficina, con esta situación se eliminan posibles conflictos de interés en la ejecución operativa de funciones.

Es menester indicar que, al cierre del mes de mayo 2021, efectivamente fue posible ejecutar el traslado respectivo de funcionarios y actividades asociadas, permitiendo la separación de funciones aludidas.

En sesión de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, **N° 26-2021** celebrada el **21 de junio del 2021,** artículo III se conoce la renuncia del MBA. Mauricio Villalta Fallas como integrante de la JUNAFO y de sus comités técnicos, tomando el siguiente acuerdo:

*Por unanimidad,* ***se acordó: 1)*** *Tomar nota de la comunicación del máster Mauricio Villalta Fallas, recibida el 16 de junio de 2021.* ***2)*** *Aceptar la renuncia presentada por máster Villalta Fallas como integrante de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial; así como participante del Comité de Inversiones y de la Comisión de Gobierno Corporativo, por las razones expuestas.* ***3)*** *Agradecer al Máster Villalta la disposición que siempre tuvo para esta Junta y para el Comité de Inversiones y de la Comisión de Gobierno Corporativo.* ***4)*** *Hacer esta renuncia de conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena para que se defina lo referente al nombramiento de una nueva persona integrante propietaria considerando que el máster Villalta Fallas, fue elegido democráticamente por el colectivo judicial.* ***5)*** *Hacer este acuerdo de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones, Comité de Inversiones, Comisión de Gobierno Corporativo y de los Gremios del Poder Judicial.* ***Se declara acuerdo firme.****”*

- 0 -

El Reglamento de Gestión de Activos, establece en su artículo N°. 09 la responsabilidad del Órgano de Dirección (en este caso la JUNAFO) de realizar el nombramiento de los integrantes del comité de inversiones (al menos cinco integrantes), así mismo en el artículo N°. 10 el detalle de requerimientos que dichos integrantes deben poseer:

***“Artículo 9. Integración de Comité de Inversiones***

*El Órgano de Dirección debe nombrar un Comité de Inversiones conformado por un mínimo de cinco miembros; sin embargo, dicho Órgano podrá justificar una conformación mínima de tres integrantes basado en el principio de proporcionalidad. Los miembros de este comité no pueden formar parte de los comités técnicos definidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo y, al menos uno de ellos, debe ser externo, no vinculado por propiedad, relación laboral, o prestación de otros servicios a la entidad, al grupo o conglomerado financiero, grupo de interés económico, empresas que prestan servicios a la entidad regulada, o por parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con miembros del Órgano de Dirección, la Alta Gerencia y los integrantes de los Comités de Riesgos e Inversiones de la entidad regulada. El Comité no puede sesionar si no cuenta con la asistencia y participación del miembro externo; salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor, que deberán ser justificados ante la Superintendencia de Pensiones, situación que no podrá mantenerse por más de tres sesiones consecutivas.*

*Los fondos de pensiones complementarios creados por leyes especiales que sean administrados por las operadoras de pensiones, pueden utilizar el Comité de Inversiones de la operadora; sin embargo, las decisiones que se tomen son responsabilidad del fondo, para lo cual, cuando se tomen acuerdos que les afecten, debe participar, con derecho a voz y voto, al menos un representante del Órgano de Dirección correspondiente.*

*No pueden ser miembros del Comité de Inversiones las personas relacionadas con la ejecución de la Política de Inversiones, con la función de cumplimiento, y quienes pertenezcan a la unidad o función de riesgos. No obstante, podrán participar en las sesiones con voz, pero sin derecho a voto.*

*El Comité debe reunirse, por lo menos, una vez al mes. Los miembros del Comité que hayan asistido a la reunión son igualmente responsables de velar porque el contenido de las actas corresponda a lo discutido y lo aprobado en cada sesión.*

*Las actas de las sesiones del Comité de Inversiones deben estar a disposición de la Superintendencia de Pensiones, por los medios que para tal efecto determine el Superintendente. En estas actas se deben consignar las deliberaciones, el detalle de la fundamentación técnica, explicaciones claras, concisas y concretas respecto a los acuerdos tomados y los documentos que se presenten y discutan en cada una de las sesiones. Si alguno de los miembros disiente de los acuerdos tomados, así debe indicarse en forma expresa y clara.*

***Artículo 10. Requisitos para los miembros del Comité de Inversiones***

*Los miembros que conformen el Comité de Inversiones deben cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos:*

*a. Ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así como de amplia experiencia y conocimiento en materia económica, financiera y bursátil. Si el fondo invierte en mercados extranjeros, al menos uno de ellos debe contar con experiencia o conocimiento en esos mercados, la cual debe quedar debidamente acreditada y documentada. Todo lo anterior, según lo establezca el Órgano de Dirección.*

*b. No haber sido sancionados por la comisión de algún delito contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios, contra los deberes en la función pública, contra la fe pública, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, durante el plazo establecido para tal efecto en la Ley del Registro y Archivos Judiciales.*

*c. No haber sido sancionados administrativamente con inhabilitación para el ejercicio de cargos en entes u órganos públicos, durante los últimos cinco años.*

*d. No estar ligados entre sí por parentesco o consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, así como por relaciones comerciales y de servicios.*

*Corresponde a los miembros designados del Comité acreditar, ante la entidad regulada, el cumplimiento de los requisitos establecidos mediante la documentación que la entidad regulada defina.*

*El Órgano de Dirección debe comprobar el cumplimiento de los requisitos y ratificar el nombramiento mediante acuerdo. Este último debe ser comunicado a la Superintendencia de Pensiones dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de su firmeza.*

- 0 -

Dada esta situación y con el fin de contar con la integración necesaria para este comité técnico, se presenta la disposición de la MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial, el MBA. Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Macroproceso Financiero Contable y del Lic. Freddy Chacón Arrieta, Integrante de la JUNAFO para participar en la composición de este órgano colegiado. Las calidades y cumplimiento de requisitos de los nuevos integrantes, es posible apreciarlos en el detalle que a continuación se presenta:

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | DOCUMENTACIÓN |
| Ana Eugenia Romero Jenkins |  |
| Freddy Chacón Arrieta |  |
| Miguel Ovares Chavarría |  |

De tal manera el Comité de Inversiones, quedaría compuesto por seis integrantes titulares, con voz y voto, de los cuales un integrante es externo a la organización conforme lo exige la normativa aplicable. Por parte de la administración, participan tres personas en calidad de invitados con voz pero sin voto, encargados de suplir el manejo técnico-operativo de las sesiones que dicho cuerpo colegiado efectué. El detalle de esta composición se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Una vez analizados los elementos descritos, **de forma unánime, se acordó:** **1.)** Agradecer la colaboración de la MBA. Ana Eugenia Romero Jenkins y del MBA. Miguel Ovares Chavarría, por su orden Directora Ejecutiva del Poder Judicial y Jefe del Departamento Financiero Contable, así como del Lic. Freddy Chacón Arrieta, jubilado judicial e Integrante de la JUNAFO, por su interés en formar parte de la integración del Comité de Inversiones. **2)** Manifestar que: **a)** Tanto la Sra. Romero como el Sr. Ovares, poseen amplia experiencia y conocimiento en el manejo del portafolio de inversiones del FJPPJ por su historial laboral previo. **b)** Ambas personas han superado previamente a satisfacción todos los filtros y validaciones respectivos por parte de la Superintendencia de Pensiones, para integrar este tipo de órganos colegiados, sin embargo, se remiten a esa entidad este acuerdo para que ratifique que tienen los atestados para formar parte del citado Comité. **c)** Las calidades del Sr. Chacón Arrieta, se remiten a la Superintendencia de Pensiones, para que valore el perfil e informe si cuenta con la expertise para integrar el Comité de Inversiones de esta Junta Administradora del Fondo. **4.)** Instruir a la Dirección de la JUNAFO para que ejecute los trámites respectivos de actualización de expedientes y demás diligencias operativas necesarias para otorgar el rol aquí acordado a los integrantes de este comité técnico. **5.)** Hacer este acuerdo de conocimiento de la Superintendencia de Pensiones y del honorable Consejo Superior del Poder Judicial para lo que a cada uno corresponda. **Se declara este acuerdo firme.**

**EN EL ÍNTERIN DEL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO XIV, ENTRÓ A LA SESIÓN EL INTEGRANTE SUPLENTE FREDDY CHACÓN ARRIETA.**

## ARTÍCULO XIV

**Documento N° 921-2021**

El máster Oslean Mora Valdez, Director de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mediante correo electrónico de 2 de julio de 2021, remitió lo siguiente:

“Estimados integrantes de la JUNAFO, en sesión 21-2021, artículo III del 17 de mayo de 2021, se conoce el caso de acrecimiento de pensión de la familia Jiménez Gutiérrez, conforme el siguiente acuerdo:

***“Se acordó:*** *1) Tener por rendido el oficio Nº PJ-DGH-AP-1750-2021 del 4 de mayo de 2021, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora interina de la Dirección de Gestión Humana, mediante el cual comunica la gestión presentada por la señora Margarita Gutiérrez Acevedo y María Paula Jiménez Gutiérrez, en virtud de que el joven Tomás Gutiérrez Jiménez, fue excluido de la planilla de pensionados a partir del 01 de diciembre de 2020 por caducidad del beneficio de pensión. 2) Conforme el estudio socioeconómico y el artículo 229 de la Ley 9544, acrecentar el beneficio de pensión de la siguiente manera: del monto que deja de percibir el joven Tomás Gutiérrez, establecer el 80% y de ese monto acrecentar en un 66% a la señora Gutiérrez Acevedo y 34% a la señorita Jiménez Gutiérrez, a partir del 7 de enero de 2021.”*

Al respecto, conviene destacar lo establecido en el artículo 229 de la Ley N°. 9544 que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al siguiente detalle:

*“Artículo 229- El monto de las prestaciones de pensión por sobrevivencia en los casos de viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al monto de pensión que recibía el pensionado al momento de fallecer, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que correspondía al causante. En caso de muerte de un servidor activo, la cuantía de la pensión por viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia será proporcional al monto de pensión que hubiera recibido el fallecido de acuerdo con el cumplimiento de requisitos en el momento de la contingencia, y en su conjunto este monto no será mayor al ochenta por ciento (80%) de lo que le hubiera correspondido al causante.”* El resaltado no es del original.

*Así mismo, el artículo 32 del Reglamento General del FJPPJ establece lo siguiente:*

1. *“d) Cuando se presente solicitud de cónyuge o compañero (a) sentimental económicamente dependiente al momento del fallecimiento de la persona servidora activa o jubilada e hijos (as): Hasta un máximo del 66% para la persona cónyuge o compañero (a) sentimental económicamente dependiente al momento del fallecimiento de la persona servidora activa o jubilada y 34%, repartido en partes iguales, para los demás gestionantes, del 80% del porcentaje máximo que se puede otorgar conforme el 229 de la LOPJ.”*

De tal forma, existe una regla de aplicación máxima establecida directamente en la Ley, que limita el porcentaje máximo de asignación para los beneficiarios de una pensión, situación que aunque dichos beneficios hayan sido determinados con las condiciones de la vieja ley (N° 7333), el hecho generador de este nuevo trámite que sería la solicitud de acrecimiento de pensión ocurre cuanto se encuentra en vigencia la Ley N°. 9544, por lo cual se debe respetar el tope máximo establecido.

Dado lo anterior, respetuosamente se sugiere rectificar el acuerdo anterior para que se lea de la siguiente manera:

***Se acordó:******1.)*** *Tener por rendido el oficio Nº PJ-DGH-AP-1750-2021 del 4 de mayo de 2021, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora interina de la Dirección de Gestión Humana, mediante el cual comunica la gestión presentada por la señora Margarita Gutiérrez Acevedo y María Paula Jiménez Gutiérrez, en virtud de que el joven Tomás Daniel Jiménez Gutiérrez, fue excluido de la planilla de pensionados a partir del 01 de diciembre de 2020, por caducidad del beneficio de pensión al cumplir mayoría de 25 años.* ***2.)*** *Conforme el estudio socioeconómico elaborado y lo definido en el artículo 229 de la Ley N°. 9544, redistribuir el beneficio de pensión entre las personas beneficiarias de la siguiente manera: en un 66% a la señora Gutiérrez Acevedo y en un 34% a la señorita Jiménez Gutiérrez, conforme lo establece el artículo 32, inciso d del Reglamento General del FJPPJ, a partir del 7 de enero de 2021, respetando que el monto máximo de los beneficios económicos a percibir no supere el 80% definido por ley”.*

- 0 -

Al considerar esta Junta Administradora que el hecho generador previamente conocido, entiéndase este como; la exclusión del joven Daniel Jiménez Gutiérrez y el acrecimiento de pensión para las partes que figuran en el beneficio, ocurre cuando se encuentra en vigencia la Ley N° 9544, **se acuerda por unanimidad:** Tener por modificado el acuerdo tomado en sesión 21-2021, artículo III del 17 de mayo de 2021 conforme al siguiente detalle: **1.)** Tener por rendido el oficio Nº PJ-DGH-AP-1750-2021 del 4 de mayo de 2021, suscrito por la licenciada Olga Guerrero Córdoba, Subdirectora interina de la Dirección de Gestión Humana, mediante el cual comunica la gestión presentada por la señora Margarita Gutiérrez Acevedo y María Paula Jiménez Gutiérrez, en virtud de que el joven Tomás Daniel Jiménez Gutiérrez, fue excluido de la planilla de pensionados a partir del 01 de diciembre de 2020, por caducidad del beneficio de pensión al cumplir mayoría de 25 años. **2.)** Conforme el estudio socioeconómico elaborado y lo definido en el artículo 229 de la Ley N°. 9544, redistribuir el beneficio de pensión entre las personas beneficiarias de la siguiente manera: en un 66% a la señora Gutiérrez Acevedo y en un 34% a la señorita Jiménez Gutiérrez, conforme lo establece el artículo 32, inciso d del Reglamento General del FJPPJ, a partir del 7 de enero de 2021, respetando que el monto máximo de los beneficios económicos a percibir no supere el 80% definido por ley.

La Dirección de Gestión Humana y el Proceso Financiero de esta Junta, tomarán nota para lo que corresponda.

**---o0o---**

**A las once horas diez minutos terminó la sesión.**

**LIC. ARNOLDO HERNÁNDEZ SOLANO LIC. FREDDY CHACÓN ARRIETA**

**Presidente Junta Administradora Secretario Junta Administradora**